

**"Análisis de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales
Inclusivos de la Comunitat Valenciana. Una perspectiva de su impacto de género".**

Presentado por:

Lara Ferrándiz Bernabeu

Tutora:

Eva Cifre Gallego

Máster Universitario en Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado (Plan 2013)

[Interuniversitario / A distancia]

[X] Edición

Curso académico 2019/2020

Segunda convocatoria

Palabras clave: Política pública, política social, política de género, perspectiva de género,
feminización de la pobreza.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contextualización	1
1.2. Objetivo	1
1.3. Definiciones.....	2
1.3.1. Definición de Política Pública	2
1.3.2. Definición de Política Social	4
1.3.3. Definición de Políticas de Género: Evolución y Características.....	8
1.4. Metodología de Análisis del Trabajo	12
1.5 La Necesidad de Analizar la Ley 3/2019, de 18 de Febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana desde la Perspectiva de Género	14
2. Análisis del tratamiento de la perspectiva de género (enfoque de género) de la Ley de Servicios Sociales Valenciana	15
2.1 Análisis del Tratamiento del Género en el Objeto, Preámbulo y Estructura de la norma	15
2.2 Perspectiva del Derecho Antidiscriminatorio de la Norma.....	22
2.3 Alusión de la Norma a la legislación de Igualdad.....	23
2.4 La conexión de la Norma entre Género y Principio de Descentralización: Garantía de Derechos.....	25
2.5 Aplicación de la Integralidad de la Perspectiva de Género en la Norma	27
3. Conclusiones: Perspectiva de su impacto	38
3.1 Principales conclusiones	38
3.2. Propuestas de articulación	41
Bibliografía.....	43
Anexo 1.....	47

Agradecimientos

A Eva Cifre Gallego y a Santiago García Campá, por sus orientaciones.

A Paqui y Antonio, mis padres, por ser ejemplo de igualdad y acompañarme en la vida.

A Rafa, por ser copiloto en esta trayectoria y en todas.

El actual trabajo ha seguido las normas APA (en su 7ª y última versión).

1. Introducción

1.1. Contextualización

Nuestro estado de derecho está configurado por diferentes políticas, que, en forma de normativas; rigen, estructuran y confeccionan la provisión de un conjunto de servicios que son públicos porque han sido generados en el marco gubernamental y que pretenden dar respuesta a la complejidad que supone garantizar los derechos de toda una ciudadanía diversa y compleja.

Las normativas, dan respuesta a la configuración de servicios para la garantía de derechos de la ciudadanía y son el reflejo de un motivo determinado, de un estilo de entender el Estado de Derecho.

El diseño de normativas que integren la perspectiva de género, se considera una forma de hacer efectivo el derecho de igualdad, así como de acelerar el proceso hacia una igualdad de género real. Y para ello, éstas deben ajustarse a unos estándares de integración de la perspectiva de género que produzcan el impacto suficiente para que las políticas públicas garanticen que están abordando las desigualdades de género estructurales.

En este sentido, para garantizar que la integración de la perspectiva de género sea sistemática y activa en un tipo concreto de política pública como es la política social, y específicamente la política de Servicios Sociales, dirigida con especial relevancia a la protección e integración social de la ciudadanía, es necesario analizar si esta tipología de políticas integran la perspectiva de género, aspecto que puede marcar la diferencia entre una adecuada política o una política ineficaz para abordar una vulnerabilidad, pobreza y exclusión social feminizada, debido a las desigualdades de género incardinadas a la estructura y funcionamiento social.

1.2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es, acercándonos a los conceptos de política pública, política social y política de género, analizar la perspectiva de género de una política social concreta, la de los servicios sociales de la Comunidad Valenciana. Para poder completar el

análisis, es necesario partir de un concreto conocimiento de la política pública, social y de género que nos permita confeccionar una conclusión sobre si la política social valenciana, plasmada en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, da respuesta en materia de igualdad a la ciudadanía en su diseño, estructura y finalidad.

No es la intención entrar en un estudio acerca del carácter disciplinario o pluridisciplinario del análisis de las políticas públicas, o estudiar sus teorías, lo cual rebasaría los objetivos de este trabajo, sino simplemente conocer el concepto y definición más idóneos que permitan realizar el análisis más certero de la ley. Es por ello que, para acercarnos al estudio concreto, vamos a partir de un conocimiento general, acercando los conceptos básicos de política pública, social y de género para poder materializar el análisis de la misma.

1.3. Definiciones

En este contexto, y necesariamente de forma prioritaria empezando por el concepto de política pública, podríamos encontrar diferentes usos sobre lo que es y significa para varios autores y autoras. El punto de partida es conocer lo que se entiende por política pública.

1.3.1. Definición de Política Pública

Algunos autores y autoras comienzan introduciendo qué significa el concepto “política” para definir “pública”. Según cita Iniesta Rodolfo Uribe (2006) la política sería igual a lo público, porque la ciudadanía, en su vida en sociedad, tiene intereses comunes:

“En su acepción más amplia, la política significa lo público, todo lo que refiere a situaciones donde haya intereses comunes en un grupo. Originalmente haría referencia a todo lo concerniente al ciudadano, o sea al miembro de la polis; es decir, todo lo civil, público, y social por extensión. Esta cosa pública que puede ser apropiada —como hemos dicho— por un solo hombre, una familia o grupo o clase de hombres, o recuperada por toda la sociedad” (p. 72).

En el mismo sentido, Wayne Parsons (Wayne Parsons, 2006 citado en Manuel Ildefonso Ruiz Medina, 2011) comenta que de lo público sólo puede ocuparse la política:

“La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes” (p. 78).

Y añade que, la política, sería la manifestación de una manera de entender un concepto o idea determinado plasmado en forma de formulación de objetivo, actividad, plan...

“Una política pública representa el intento de definir y estructurar una base racional para actuar o no actuar. La función de las políticas cambia en la medida en que el Estado modifica su manera de legitimar el discurso, define su legitimidad a partir de sus políticas [...] disponer de una política es tener razones o argumentos racionales que incluyen la presunción de que se comprende un problema y que se tiene una solución, el discurso de las políticas se convirtió en el principal modo a través del cual el electorado participaba en política y se relacionaba con élites políticas rivales. Las políticas o la plataforma constituyen la divisa básica del intercambio democrático” (p.78).

Desde esta referencia, otra autora, Carmen Ruiz Viñals (Carmen Ruiz Viñals, 2004 citado en Manuel Ildefonso Ruiz Medina, 2011) señala cuál es el éxito de una política pública, que no es otro que provisionar de los servicios necesarios a la ciudadanía, contando con ella, para diseñar el mejor funcionamiento de los mismos, teniendo en cuenta a los trabajadores y trabajadoras públicos que sirven a la ciudadanía como pilares fundamentales para el ejemplo del adecuado ejercicio de lo público:

“La clave del éxito de las políticas públicas en su provisión de bienes y servicios públicos reside en contar con reglas, normas, controles, competencias, promoción de la participación ciudadana y la coordinación intergubernamental con organismos internacionales que aseguren los incentivos suficientes para que los organismos estatales y los funcionarios y trabajadores públicos busquen el bien común” (p.80).

Siguiendo a Wayne Parsons y a Carmen Ruiz Viñals en su concepto de política pública, adoptaríamos en beneficio de este trabajo analítico, la definición genérica de política pública de Carmen Ruiz Viñals (Carmen Ruiz Viñals, 2004, citada en Manuel Ildelfonso Ruiz Medina, 2011) como un plan/programa gubernamental aplicado a una variable concreta con necesidad de acción para el bien común de la ciudadanía:

“Es un espacio geográfico o un ámbito de acción como la educación, la seguridad, la acción social, la salud, la regulación del mercado de trabajo, la inmigración, el envejecimiento, la ciudad” (p.81).

1.3.2. Definición de Política Social

En este sentido, una política pública en el ámbito de la acción social sería la política social, que más adelante veremos, se ha formulado en nuestro país en concreto, como un sistema de protección social denominado “Servicios Sociales”. Pero previo a llegar a este sistema público de acción social, es preciso adentrarse primeramente en el concepto de política social. Siguiendo a Jerónimo Molina Cano (2012), éste nos presenta una definición de política social como la actividad del estado realizada de forma jurídica:

“La política social se nos presenta como una actividad eminentemente estatal que, dando un carácter peculiar a una época histórica, se realiza jurídicamente en un doble sentido: globalmente a través de la socialización del derecho y específicamente por medio de su configuración institucional a través del impuesto, la meritocracia, la negociación laboral y el aseguramiento colectivo, en sus diferentes variantes” (p.543).

En este sentido, el autor se reafirma en que la política social se realiza jurídicamente. Según la conocida tesis de Richard Morris Titmuss (Richard Morris Titmuss, 1981 citado en Jerónimo Molina Cano, 2012), es claro que la Política social se ejecuta mediante instrumentos de naturaleza jurídica:

“Tanto la Política social en su acepción original, próxima a la idea de una política jurídica laboral, como las políticas sociales de la sociedad del bienestar, tienen

un fundamento jurídico, lo que determina la institucionalización de un repertorio concreto de medidas” (p. 544).

Del mismo modo, Patrick De Laubier (Patrick De Laubier, 1984 citado en Sergio Fernández Riquelme, 2010) concibe la política social como el conjunto de medidas que se efectúan de acuerdo con la conciencia de unos derechos sociales:

“Conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar las condiciones de vida materiales y culturales de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado [...] un dominio que se sitúa entre lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del poder el Estado” (p. 32).

El autor Ian Gough (2007) explica que las políticas sociales en un Estado de Bienestar se basan en la negociación colectiva con el Estado para la protección social de la ciudadanía, sin embargo, estas políticas sólo tienden al éxito cuando se analizan las necesidades sociales desde la descentralización del Estado, por tanto, desde la óptica de lo local:

“En el pensamiento reciente sobre los Estados de bienestar y su transformación se resta importancia a las condiciones sociales y al cambio estructural, pese a que son fundamentales para comprender las políticas sociales en el mundo en desarrollo. [...] Los objetivos sociales fundamentales deben basarse en un consenso acordado sobre necesidades o capacidades básicas, como lo están muchos derechos humanos contemporáneos. Pero los que satisfacen las necesidades, incluidas las políticas sociales, tendrán más probabilidades de éxito si se adaptan a los entornos locales” (p.20).

Un estado con políticas descentralizadas permite garantizar que las políticas sociales (en este caso), negociadas, adoptadas y formuladas, desde el análisis de las necesidades más concretas de la ciudadanía porque están basadas en la territorialidad, dispongan de una premisa de éxito en sus medidas adoptadas. Por ello, David W. Valenzuela (2003) aboga por

la importancia de unas políticas sociales arraigadas al territorio para la efectividad en la resolución de los problemas sociales:

“En la actualidad, esta infraestructura constituye el capital social esencial para la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo que opera desde lo local y se sustenta en la participación democrática de la gente. [...] el desarrollo local es un proceso participativo en el que intervienen representantes de los diversos sectores de una localidad para definir una visión común de futuro, la cual forma el marco general para la planificación y ejecución de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad” (p. 10-11).

En este sentido aparece la importancia del territorio como espacio de análisis sobre la realidad, en pro de comprender lo que las localidades necesitan para definir sus estrategias de desarrollo. Por ello, es muy relevante lo que comenta este autor, porque es un determinado conocimiento de la realidad el que provoca la elección de unas concretas políticas públicas para el desarrollo efectivo y no sólo eso, sino su priorización y su forma de llevarlas a cabo. Mariángela Petrizo y César Nicándro Cruz (1994) explican por qué las políticas sociales concretas permiten resolver problemas públicos:

“El estudio de las políticas públicas (*public policy sciences-studies*) puede entenderse como un campo multidisciplinario de investigación cuyo objeto es el estudio de problemas públicos que enfrentan las sociedades contemporáneas, la generación de alternativas de acción para su atención y el estudio de causas y consecuencias de la acción pública producto de la ejecución de políticas” (p.1).

De esta forma, se da a entender que las políticas públicas como herramienta principal de la actuación gubernamental, están orientadas a la resolución de los problemas de los intereses públicos y serán la consecuencia del desarrollo de un país. De acuerdo con las políticas que se adopten, según su efectividad e impacto positivo para la resolución de problemas y necesidades, el país obtendrá unos resultados de desarrollo u otros.

1.3.2.1. Los Servicios Sociales como Herramienta Fundamental de la Política Social

El Estado de Español, expresa en la Constitución de 1978, la creación de sistema público de Servicios Sociales, que contiene el precepto de que los poderes públicos con su política social deben perseguir el bienestar social. Así, en el artículo 1 se establece que las competencias en materia de Asistencia Social por principio de descentralización de las políticas serán competencia de las Comunidades Autónomas, con la aprobación de sus correspondientes normativas en materia de servicios sociales.

Carmen Alemán Bracho (1995) explica cómo desde la transición se democratizan las políticas y con ellos las instituciones públicas, claves para la configuración de un sistema de políticas sociales denominado “Servicios Sociales”:

“Desde la transición política, con la democratización de las instituciones, se produce en España la configuración de los servicios sociales como un sistema público y organizado de protección social, dirigido a todos los ciudadanos y superador de las acciones benéficas y asistenciales del pasado” (p.199).

Además, añade las normativas favorecedoras de la evolución de los Servicios Sociales como Sistema de Política Social Español:

“La aprobación de los 17 Estatutos de Autonomía, todos ellos con referencias a los servicios sociales. — La aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985. — La aprobación de las 17 Leyes Autonómicas de Servicios Sociales” (p.200).

Entre estas normativas Autonómicas, se encuentra la de la Comunidad Autónoma Valenciana, Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, que sigue a la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana.

Rafael de Lorenzo y Antonio del Valle (Rafael de Lorenzo, 1981 y Antonio del Valle 1987 citado en Carmen Alemán Bracho, 1995) fueron de los primeros autores en resaltar la dimensión del mandato expresado por la Constitución acerca del compromiso de los poderes públicos con las cuestiones sociales y el bienestar social, dado que España en su constitución de estado democrático de derecho, persigue el bienestar de la ciudadanía:

“Los servicios sociales son un sector de bienestar social o un instrumento de la política social y, por tanto, constituyen un medio para hacer efectivo el derecho a vivir en una sociedad más justa, más igualitaria en la que los ciudadanos no se vean discriminados por situaciones que les vengán impuestas por la marginación o la pobreza. Los servicios sociales son una vía para tratar de cubrir desajustes, desequilibrios y desigualdades sociales” (p. 202).

En este sentido, el sistema público de servicios sociales tiene el mandato de ser diseñado desde una perspectiva de género, ya que uno de los mayores desequilibrios entre la ciudadanía es la desigualdad de género, de donde deriva la condición de subordinación de las mujeres, detonante para el surgimiento de los movimientos feministas en el mundo. Un sistema que nos organiza y categoriza socialmente como hombres y mujeres, determinando una sociedad que otorga el poder al rol masculino. La visión totalizadora del patriarcado extendida y sistémica está incorporada al discurso político, lo que determina una forma de entender y hacer política y, por tanto, de diseñar políticas.

1.3.3. Definición de Políticas de Género: Evolución y Características

El nivel de bienestar de las personas depende de su relación con las distintas esferas institucionales, es por esta razón, que el camino hacia la igualdad real de género en nuestro país es clave y es una de las apuestas a establecer más prioritarias para el cumplimiento del deseado estado de bienestar.

De esta forma, las políticas de género no han sido priorizadas en España, hasta el empuje de Europa cuando ésta aprobó la integración de la perspectiva de género como su planteamiento político oficial para la igualdad de género. Cuando se reveló que la cuestión de género es un aspecto transversal que afecta a todas las variables (social, política, económica, patrimonial, empleo...), la integración de la perspectiva de género se integró a nivel internacional y europeo como la principal estrategia política global, en una toma de conciencia real de que el desarrollo humano y la transformación social, no pueden llevarse a cabo si no existe una igualdad de género. Esta necesidad de políticas de género globales

aplicadas de forma transversal a cualquier tipología de política, se convirtió en el enfoque político oficial de la Unión Europea y sus Estados miembros en el Tratado de Ámsterdam (1997), y su base jurídica se vio reforzada por el artículo 8 del TFUE, que se compromete a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad en todas sus acciones. Así, en los últimos años, en nuestro país, empujados por las políticas de género europeas, se ha avanzado en instrumentalizar el género de manera transversal a todas las políticas públicas (sanitarias, económicas, educativas, sociales...).

Centrándonos en lo que son las políticas de género, Juana María Gil Ruiz (2013) nos adentra en la evolución de las políticas de género:

“La aplicación del concepto de género al derecho ha marcado la transición de las leyes de igualdad clásicas a las leyes de igualdad modernas. De este modo, desde el derecho se han ido cubriendo distintas etapas: si la primera se centraba en la igualdad de derechos y en la igualdad de trato ante la ley; la segunda se centró en la acción positiva y en las medidas específicas para las mujeres; para arribar a la tercera que pretende, mediante la perspectiva de género, incorporar cambios sustanciales de igualdad efectiva intergéneros, implicando en esta tarea a los hombres. En otras palabras, se ha pasado de la lucha por la Igualdad formal (la igualdad política, la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos), punto cardinal del Estado Liberal, a la lucha por la igualdad de oportunidades, sin olvidarnos de la lucha por la igualdad de hecho o sustancial, punto cardinal del Estado Social, en una dura y agotadora carrera de aciertos y desaciertos” (p.2).

Siguiendo esta evolución, las políticas de género actualmente están caracterizadas según Eva Alfama y Alba Alonso (2015) por un enfoque dual:

“Compensar los efectos de la desigualdad de género con políticas específicas orientadas a las mujeres [...] y revisar en profundidad cómo se diseña, implementa y evalúa la intervención pública en todos los niveles administrativos y en todos los ámbitos sectoriales para corregir estos sesgos y garantizar que las necesidades de

ambos sexos son tenidas en cuenta y que la igualdad se incorpora como una prioridad de forma sistemática” (p.26).

Es comprensible admitir que las políticas de género deben instaurarse como prioritarias para conseguir el derecho a la igualdad y en este sentido, deben matizarse, organizarse, diseñarse e implementarse de forma transversal a todo tipo de políticas y derivado de ello, ejemplificarse como normativas que rijan dichas políticas para obtener un impacto real en las estructuras desiguales que siguen marcando en forma de violencia estructural y sistemática la vida de las mujeres en especial, lo que influye de forma destacada en el bienestar de la sociedad en general.

Manuela Mora Ruiz (2009) expresa la relación estrecha que existe entre el derecho y el género:

“Puede reconocerse abiertamente la estrecha relación entre Género y Derecho y, muy especialmente, la capacidad del mismo para constituirse en herramienta idónea de transformaciones sociales más intensas dirigidas a lograr la efectiva igualdad de mujeres y hombres [...] el modelo de servicios sociales que tenemos en la actualidad [...] pone de manifiesto cómo el Derecho está contribuyendo a cambiar los roles de las mujeres en la sociedad y posibilitar la efectiva igualdad de género [...] Desde esta perspectiva [...] la ordenación administrativa de los servicios sociales ofrece un marco jurídico suficiente para que dichos servicios se articulen ahora teniendo en cuenta las exigencias de la igualdad de género” (p.30).

Además, concluye exponiendo lo siguiente:

“Nos encontramos en un ámbito material en el que el género opera claramente como parámetro de creación y aplicación del derecho, reforzándose, pues la posición igualitaria de las mujeres en el marco irrenunciable del Estado Social” (p.41).

Juana María Gil Ruiz (2013) destaca la importancia del “Nuevo Derecho Antisubordiscriminación”:

“El legislativo español, en esta línea de trabajo e impulsado por las demandas internacionales (Beijing, 1995) y europeas (Tratado de Ámsterdam y Tratado de

Lisboa), ha apostado recientemente, por un nuevo Derecho antidisdiscriminación. [...] éste, debe incorporar la perspectiva de género, de manera transversal y principal. Esta integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en la totalidad de los procesos normativos –elaboración, interpretación y aplicación- de la totalidad de las normas y en la totalidad de las políticas públicas –se manifiesten a través de normas o de actos administrativos no normativos-, se denomina transversalidad, traducción del neologismo inglés gender mainstreaming” (p.2).

1.3.3.1 La Transversalidad de Género y su Importancia de Aplicación en las Normas Jurídicas

Juana María Gil Ruiz (2013) continúa explicando la importancia de la transversalidad de género en las políticas públicas:

“El atractivo de la transversalidad de género, sin duda, descansa en su potencial transformador a gran escala, esto es, en las múltiples posibilidades de este principio como eje transformador simultáneo y unívoco en todas las áreas de la política. Y ello es así, porque este proceso excede del mero proceso de elaboración de las normas, reatrayendo su aplicación e interpretación, y su planeamiento político, y su óptima implementación, neutraliza los estereotipos de género latentes en los mismos” (p.3).

Sin embargo, la transversalidad de género, para estar trazada desde el derecho, necesita del derecho antidiscriminatorio y antisubordinación, y tener en cuenta, además, según esta autora, dos axiomas:

1. El reconocimiento de la masculinidad del ordenamiento jurídico que obliga a su revisión crítica.
2. La insuficiencia de los mecanismos tradicionales de tutela antidiscriminatoria, basados en el sexo, a los fines de la igualdad de género, lo que obliga a una revisión global del Derecho y a la apuesta de un nuevo Derecho antisubdiscriminación.

Y además añade:

“No entender esto, ni conocer la complejidad del gender mainstreaming, además de no estar preparados para acometerla con rigor, implica –desde el desconocimiento -perpetuar o incrementar, en su caso, la discriminación contra las mujeres, esta vez desde la estructura jurídico-política formulada...” (p.3).

En este sentido, en la Declaración de Beijing (Naciones Unidas, 1995), gobiernos como el de España, adoptaron y se comprometieron a garantizar que en todas sus políticas y programas quede reflejada la perspectiva de género. Así, la acción propuesta en esta convención invita a todos los gobiernos y a los demás agentes a integrar la perspectiva de género (gender mainstreaming) como corriente principal, en las legislaciones y en las políticas públicas.

1.4. Metodología de Análisis del Trabajo

Es por tanto que, para determinar si la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, está diseñada desde la perspectiva de género, se va a proceder a modo de metodología analítica, a estudiar la ley y a descomponerla desde la perspectiva transversal, realizando una analítica de su articulación: tratamiento del lenguaje en la ley, mecanismos para el logro de la igualdad real, transversalidad de género en la ley, presupuestos de género, herramientas de aplicación de género que plantea, su evaluación desde la perspectiva de género y las herramientas de género que plantea.

En este sentido, las unidades de análisis van a poner el foco:

1. sobre los compromisos y estrategias en materia de género adoptadas por la ley,
2. sobre las herramientas utilizadas por la Ley en el uso transversal de la perspectiva de género para el desarrollo de unos servicios sociales con carácter igualitario,
3. sobre el lenguaje neutro e inclusivo,
4. sobre la configuración del sistema de servicios sociales en su obligatoriedad de modelarse desde la perspectiva de género.

Para ello, se va a tener en cuenta; la categoría género en su utilidad para el análisis social, el derecho antidiscriminatorio, la feminización de pobreza, la transversalidad de género, la perspectiva de género y las políticas de género.

El análisis se va a realizar tomando como referencia las categorías políticas de tratamiento del género de la autora Naila Kabeer (Naila Kabeer, 1994 citado en Libertad Jimenez, 2016). En su análisis de las políticas de desarrollo, esta autora, realiza una revisión de las políticas de género y propone una clasificación teniendo en cuenta las relaciones desiguales de género existentes en la sociedad y el compromiso político con las metas de equidad. Así Kabeer ha diseñado una clasificación de las políticas de género que se concretan en:

1. Las políticas ciegas al género (gender-blind policies), las cuales ha definido como como aquéllas que, aunque parecen neutrales, están implícitamente sesgadas a favor de lo masculino las cuales, no reconocen la desigualdad entre los géneros, reproducen las relaciones de género existentes y tienden a excluir a las mujeres de los recursos y beneficios de las políticas institucionales.
2. Las políticas conscientes de género (gender-specific policies) con distintos niveles de conciencia de género: a) Políticas neutrales de género; cuya intención no es cuestionar las desigualdades de género sino beneficiar a ambos hombres y mujeres en términos de sus necesidades prácticas. b) Políticas específicas de género; que serían las que tienen en cuenta y reconocen las necesidades específicas de las mujeres y que ponen a su disposición recursos para ellas, y c) las Políticas redistributivas de género que serían las que intentan cambiar las relaciones de género existentes para hacerlas más equitativas, justas y solidarias, redistribuyendo los recursos, las responsabilidades y el poder entre mujeres y hombres (p.17).

El Ordenamiento jurídico, a través de la normativa antidiscriminatoria, ha de cumplir una obligación referente a la consecución de la efectiva igualdad de mujeres y hombres. Según Manuela Mora Ruiz (2009) sería el siguiente:

“Una función preventiva de conductas discriminatorias, dirigida a los poderes públicos y a los sujetos particulares; una función tutelar frente a situaciones de efectiva

discriminación; y una función promocional, de forma que se superen los estadios de prohibición y sanción de conductas de discriminación, para pasar al fomento de la paridad y la efectiva remoción de obstáculos que impiden la efectiva igualdad de las mujeres en el ejercicio de los derechos” (p.30).

Una vez conocemos qué son las políticas públicas, las políticas sociales, los servicios sociales como política social y las políticas de género, así como su aplicación a las políticas públicas, desarrollados en esta introducción, con la metodología y enfoque descritos, se va a proceder a desarrollar el análisis del tratamiento de la perspectiva de género (enfoque de género) de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana.

1.5 La Necesidad de Analizar la Ley 3/2019, de 18 de Febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana desde la Perspectiva de Género

La política de género, desde su esencia transversal actual, debe incorporarse al diseño de las normativas de las políticas sociales. Así, la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, debería estar diseñada e implementada desde la perspectiva de género con el objetivo de garantizar la igualdad formal de género, que, en su consecución directa de estar adecuadamente formulada en la ley, garantizaría la igualdad real de género.

Las políticas sociales, en su deber universal de protección social, deben atender las consecuencias directas derivadas tanto de las desigualdades sociales como de las desigualdades de género, cuidando, por tanto, aspectos como la feminización de la pobreza, máximo exponente de la conjunción entre estas dos variables de la desigualdad.

Por tanto, existe una necesidad de valorar si la política social de servicios sociales está garantizando, desde la perspectiva transversal del género, la igualdad de género en la sociedad, en este caso, en la sociedad valenciana. De este modo, se va a analizar en el

desarrollo de este trabajo, si el instrumento (normativa) de política social, servicios sociales, está diseñado y estructurado con perspectiva de género.

2. Análisis del tratamiento de la perspectiva de género (enfoque de género) de la Ley de Servicios Sociales Valenciana

Siguiendo el objetivo del trabajo, a continuación, se procederá a analizar si la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, está formulada y redactada teniendo en cuenta la perspectiva de género. Así, se podrá evaluar al final, si la política social valenciana, en su instrumento de aplicación “Servicios Sociales”, está contribuyendo a garantizar la igualdad de género.

2.1 Análisis del Tratamiento del Género en el Objeto, Preámbulo y Estructura de la norma

El objeto de la ley es (cito textualmente); “configurar el marco jurídico de actuación de los poderes públicos valencianos en el ámbito de los servicios sociales” (Título preliminar. Artículo 1. Objeto de la ley), por tanto, el análisis a realizar debe partir del enfoque que la ley aporta al mismo, ya que el objeto de la normativa es el núcleo de la estructura de su configuración. Partiendo de él, podrá entenderse el grado de enfoque de género articulado.

El objeto de la ley, en concreto pretende:

- a) Promover la universalidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales garantizando, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, el derecho subjetivo al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales [...]

Como podemos observar en el apartado a), existe una pretensión de configurar los servicios sociales como un sistema para todas las personas, basándose en los principios de igualdad, equidad y justicia como garantía de ello. En este sentido, la ley admite la igualdad como un derecho imprescindible.

Podemos deducir que incluir la palabra igualdad, denota interés por introducir la perspectiva de género en la configuración del sistema social, por lo que vamos a proceder a observar qué elementos utiliza en el preámbulo que avalen dicho interés.

El preámbulo en una ley es la justificación de la necesidad de la misma, es decir, la explicación de las razones que han llevado a articular la normativa. Así la define Fernando Santaolalla López (1991):

“En la que se enuncian las razones que han llevado a su promulgación, en una suerte de justificación previa [...] Las Exposiciones de Motivos o Preámbulos constituirán la parte expositiva de la ley” (p.48).

Es importante comprender que el concepto de igualdad (promulgado en el objeto de esta ley), es un concepto amplio, y por tanto debería concretarse teniendo en cuenta todas las variables que completan dicho concepto.

El concepto de igualdad es el propio de los estados que se definen como sociales, democráticos y de derecho, como es el Estado Español. Así, Fernando Rey Martínez (2011) define el concepto de igualdad de la siguiente manera:

“La igualdad constitucional, en su triple condición de valor superior del ordenamiento jurídico, de principio, cuya realidad y efectividad corresponde promover a los poderes públicos, y de derecho fundamental, explicita, al mismo tiempo, tres dimensiones: de libertad, democrática y social” (p.168).

Atendiendo a las prohibiciones de discriminación en sentido estricto (racial, sexual...) entra con especial mención el género, particularmente en la categoría de discriminación indirecta. A Colación, Edorta Cobreros Mendazona (2007), en referencia al significado de la idea jurídica de igualdad, señala: “La igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales” (p.97).

Así mismo, Martha Palacio Avendaño (2010) explica la importancia de detallar, centrar o especificar género en su relación con la igualdad:

“El tema de la igualdad de género amplía el sentido unívoco de un ideal ético-político cuyos presupuestos ontológicos apuntan al sesgo de un individuo masculino y que aún perviven en el sistema organizativo de la sociedad” (p.219).

Por tanto, la presente normativa, en cuanto a que no concreta la igualdad en sentido contrario a la discriminación específica (entre otras) por cuestión de género, puede estar obviando la perspectiva de género, lo cual implica, de acuerdo al concepto de discriminación indirecta, que la no percepción de la discriminación por género afecte al propio objeto de la ley: promover la universalidad en condiciones de igualdad.

En el Capítulo III: Estructura funcional del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Artículo 17. Funciones de la atención primaria. Punto 1. M) se expone: «asesoramiento técnico específico en materia de migración y refugio, diversidad funcional o discapacidad, situaciones de discriminación, delitos de odio, adicciones, tutelas y otros...». Aquí, puede observarse lo comentado de forma específica. En este apartado, en lo que se prevé será la actuación real de la ley, no tiene en cuenta cuando nombra discriminación, el género.

No atender desde un primer momento en el objeto de la ley a una igualdad concreta de género, implica en consecuencia directa no atender de forma específica a la discriminación por género en su construcciones y consecuencias generales hacia las mujeres.

Según Cristina González Oñate (1995) el género es la diferencia cultural asignada a los sexos:

“El género hace referencia al conjunto de asignaciones de todo tipo - potencialidades y prohibiciones- que la sociedad atribuye a los sexos. La categoría género remite necesariamente a la diferencia, imprimiéndole a la diferencia biológica entre los sexos connotaciones de tipo cultural, que llenan de un contenido especial lo femenino y lo masculino” (p. 158).

Desde este sentido, el estudio de la antropología de género afirma que la construcción del género es el desencadenante de la desigualdad de género. Como afirma Anastasia Téllez Infantes (2001):

“Porque el género es un elemento estructurante de la realidad, y por tanto presente en otros ámbitos de la misma, puesto que define las relaciones entre los seres humanos asignándoles diversos papeles que, al ser contruidos como desiguales, sitúan a hombres y mujeres en distintas posiciones” (p. 3).

Y añade para explicar la relación entre concepto género y desigualdad de género:

“El ser mujer o el ser hombre, son del mismo modo categorías contruidas que se corresponderán, a nivel ideológico, con lo que una sociedad, como la nuestra considera como "femenino" o "masculino". Esta dicotomía establecida sobre ambos sexos dará como resultado que un género sea considerado inferior al otro, o al menos, dotado de valores que lo diferencien minusvalorándolo, estableciéndose de este modo unas relaciones de poder no igualitarias, que, en el ámbito laboral, se manifiestan de forma evidente” (p. 4).

María Martín Sánchez (2012) amplia el concepto de desigualdad de género y lo vincula al de discriminación por razón de género:

“Aquí encuentra su razón de ser el hecho de que con la llegada del Estado de Derecho no solo se proclame la igualdad de trato para todos, sino que se prohíba de manera expresa la discriminación por determinadas causas que, tradicionalmente han sido causa de diferenciaciones de trato injustificadas e irrazonables. De entre estas causas, el sexo es quizá la causa que más sorprendente ya que, mientras el resto de las causas protegidas se erigen como rasgo identificador de determinados grupos minoritarios – minorías raciales, minorías ideológicas o religiosas, minoría homosexual, -. El sexo no identifica un grupo cuantitativamente minoritario -de hecho, en periodos, las mujeres han superado en número a los hombres-, sino a un grupo cualitativamente desfavorecido y subordinado al sexo “dominante”. Es paradójico que un grupo no minoritario haya sido relegado a un segundo plano en el mejor de los casos, en otros incluso a la invisibilidad, en cualquiera de los ámbitos de la vida: social, económico, laboral, político” (p. 1189).

Estas razones, implican que pueda ser cuestionable (por el escaso grado de especificidad respecto al género en la ley) el hecho de que la normativa haya agregado en su formulación el derecho antidiscriminatorio y más teniendo en cuenta la percepción de que los servicios sociales son la política social pública de protección social con especial atención a los colectivos más vulnerables, los cuales, suelen encontrarse en una experiencia de vida que les sitúa en desventaja fuera del sistema o en situación de exclusión social y por tanto, en situación de discriminación. Al añadir la variable género de forma más específica, parecería que se habría tenido en cuenta, en mayor medida, la doble vulnerabilidad y discriminación del género femenino, por ser mujer y por encontrarse en situación de exclusión o en riesgo de la misma. Además, teniendo en cuenta que la variable ser mujer, ya es motivo de vulnerabilidad en cuanto a considerarse socialmente por la construcción del género el colectivo en desventaja con respecto al otro género, el masculino. Esta razón de vulnerabilidad experimentada por el género femenino conlleva que exista una feminización de la pobreza y, en consecuencia, que tengan que ser las mujeres las principales usuarias y beneficiarias de las políticas sociales de protección, como son los servicios sociales, objeto de esta ley.

Claudia Inés Kaen e Isabel Lencina (2017) definen el proceso de feminización de la pobreza:

“Se utiliza para referirse a procesos como el de la feminización de la pobreza, un fenómeno o práctica social que adquiere una forma femenina. Es un cambio, una diferencia en los niveles de la pobreza, que pone en evidencia las desigualdades basadas en el género, entre el hombre y la mujer. [...] Los estudios de género aportan una riqueza de conocimientos sobre las características e impactos diferenciados que tiene la pobreza sobre hombres y mujeres. Dichos estudios, y otros realizados en la región, ofrecen una importante evidencia acerca de la manera como la pobreza genera mayores vulnerabilidades y exclusiones entre las mujeres y sus familias, así como las menores oportunidades que tienen las mujeres pobres en comparación con los hombres pobres para superar dichos obstáculos” (p.1).

Un estudio sobre Mujer y Desarrollo de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL y UNIFEM, 2004) explica el fenómeno global de la pobreza en relación con el género:

“El interés hacia el análisis del fenómeno de la pobreza desde una perspectiva de género tiene su origen en el movimiento internacional de mujeres y se basa en la necesidad de reconocer que la pobreza afecta a hombres y mujeres de manera diferente. Se trata de identificar los factores de género que inciden en la mayor o menor disposición de las personas a experimentar la pobreza, y en las características diferenciadas que ella puede adquirir al tratarse de hombres o mujeres. Además, la perspectiva de género enriquece la conceptualización de la pobreza al ir más allá de su descripción y hacer hincapié en sus causas, entendiendo el fenómeno como un proceso y dándole, de ese modo, una perspectiva más dinámica. Por otra parte, la perspectiva de género contribuye al diseño de políticas que permiten orientar las medidas a las situaciones de pobreza más graves y a los más vulnerables” (p.9).

Los datos procedentes de estudios que miden la pobreza, podrían constatar que asistimos a un proceso de feminización de la pobreza al mostrar que las tasas de pobreza son mayores en mujeres que en hombres. A nivel mundial, este hecho lo constata la ONU en su Informe de 2018: “La igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” (ONU Mujeres, 2018), a través de datos e indicadores recogidos. El informe expone lo siguiente:

“Las mujeres y a las niñas se enfrentan a múltiples formas de discriminación interrelacionadas entre sí. La reparación de las desventajas, firmemente arraigadas, a las que se enfrentan determinados grupos de mujeres y niñas será fundamental para lograr el avance” (p.8).

Y continúa exponiendo lo siguiente:

“La desigualdad perjudica a todos: es una amenaza para la estabilidad social y política, un obstáculo para el crecimiento económico, una barrera para el avance en

la erradicación de la pobreza y, desde un punto de vista más general, para la materialización de los derechos humanos” (p. 6).

Los datos concluyen que a escala mundial hay 122 mujeres de 25 a 34 años de edad que viven en la pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo grupo de edad. Esto equivale a un total de 330 millones de mujeres y niñas pobres en comparación con 325 millones de hombres y niños pobres. Cuando estas cifras se ajustan teniendo en cuenta el hecho de que los hombres superan en número a las mujeres en la población, los resultados indican que es un 4% más probable que las mujeres vivan en la pobreza extrema que los hombres.

En España, casi la mitad de las mujeres españolas (47,4%) serían pobres si vivieran en solitario, un porcentaje dos veces superior al de los hombres (23,8%). Que la intensidad de la pobreza sería muy superior entre ellas en caso de vivir solas, puesto que un número sustancial de mujeres no tiene acceso ningún tipo de ingresos. Que este riesgo de pobreza latente se expande a lo largo de su ciclo vital y especialmente a partir de la instauración de la familia de procreación. Las desigualdades por sexo son extrapolables al conjunto de la geografía española, con independencia de la región analizada y que bajo el supuesto de autonomía incluso las mujeres de las CCAA económicamente más desarrolladas tendrían un riesgo de pobreza superior al de los hombres de las CCAA económicamente más débiles¹.

Observamos que, en el preámbulo de la norma, no se hace alusión a la feminización de la pobreza. Teniendo en cuenta que la presente ley tiene la finalidad de atender a los colectivos más vulnerables en relación a su situación de riesgo o padecimiento de pobreza como indicador contario del bienestar, podría haberse tenido en cuenta el hecho de introducir la feminización de la pobreza en cuanto a que la pobreza, objeto de esta ley, afecta en mayor

¹ Fundación FOESSA VII “Informe sobre exclusión y desarrollo en España 2014”. Documento de trabajo: La pobreza en España desde una perspectiva de género (p. 33).

medida a las mujeres, lo cual, hubiese además actuado como refuerzo en cuanto a la justificación de haber integrado en la norma un fuerte y marcado rasgo de género.

Como afirma Joan W. Scott (Joan W. Scott, 1996 citado en Ivonne Vizcarra Bordi, 2008):

“Para entender las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres se debe partir del hecho de que se trata de un proceso histórico y complejo de relaciones sociales, basado en la creencia de que las diferenciaciones sexuales, donde lo femenino es inferior a lo masculino, justifican y legitiman relaciones de dominación y privilegios de unos (hombres) sobre otras (mujeres) en todos los referentes sociales: simbólicos, materiales, jurídicos, morales y éticos. Todos ellos apuntalan normatividades que construyen el orden social, las que a su vez justifican ampliamente la distribución inequitativa de las riquezas y del poder” (p. 143).

Paz López y Vania Salles (Paz López y Vania Salles, 2000 citado en Ivonne Vizcarra Bordi, 2008) explican cómo se devalúa lo femenino y da origen a las desigualdades de género que generan pobreza y vulnerabilidad en el género femenino:

“Además de la desvalorización de lo femenino derivado de la división sexual del trabajo, la discriminación que sufren las mujeres por su propia condición de género es más perjudicial que la de los hombres, particularmente en ciertos ciclos de vida doméstica (embarazo, lactancia, vejez); en los procesos de cambio familiar (monoparentales); en la precariedad del empleo; en las desigualdades salariales entre hombres y mujeres; en la restricción al acceso a la propiedad y al control de los recursos, y en la falta de control sobre sus propios cuerpos en cuanto a sexualidad y reproducción” (p. 144).

2.2 Perspectiva del Derecho Antidiscriminatorio de la Norma

En este sentido, se podría constatar como necesario una mayor perspectiva de género en las políticas sociales en cuanto a que su objeto principal que es la protección social, parece estar vinculado a la desigualdad de género. Y de esta manera, formular leyes, como la

presente, poniendo el foco en el derecho antidiscriminatorio, la transversalidad y perspectiva de género, se promulga importante para la consecución de la igualdad real, que a su vez repercutiría directamente en la erradicación de la pobreza.

En esta línea, el Tribunal Constitucional, como máximo el órgano del Estado encargado de administrar justicia, ha determinado las consideraciones en cuanto a lo que se refiere a discriminación directa e indirecta. Magdalena Lorenzo Rodríguez Armas (2007) recoge estas consideraciones:

“El TC ha considerado discriminación directa el trato desfavorable dado a la mujer como consecuencia de una condición únicamente femenina, como, por ejemplo, tratar de forma desfavorable el embarazo [...]. También ha puesto el acento en la discriminación indirecta, esto es, se trata desfavorablemente a la mujer en virtud de una característica que no aparece inmediatamente vinculada al sexo, pero que en la práctica supone poner a la mujer en una posición desfavorable” (p.109).

Por ello, Juana María Gil Ruiz (2013) apela a la importancia de la transversalidad de género en las políticas públicas desde la óptica del derecho antidiscriminatorio/antisubordiscriminación porque el género es un constructo social transversal que en cuanto que afecta a las mujeres por el hecho de serlo, afecta a todas sus variables, de forma que todo lo que se legisle, va a afectar a las mujeres desde su experiencia de desigualdad y por tanto, debe percibirse la perspectiva de género para estudiar cómo les va a afectar.

Así, esta autora, explica la importancia de aplicar la transversalidad de género y el derecho antidiscriminatorio en todas las normativas:

“Debe incorporar la perspectiva de género, de manera transversal y principal. Esta integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en la totalidad de los procesos normativos –elaboración, interpretación y aplicación- de la totalidad de las normas y en la totalidad de las políticas públicas” (p. 3).

2.3 Alusión de la Norma a la legislación de Igualdad

Siguiendo el análisis del estilo de formulación de la ley, como hemos observado y analizado, nos encontramos con que la normativa, presenta y pretende aplicar el concepto de igualdad, pero lo hace de forma generalizada, sin atender el género de forma específica. Y cuando lo introduce, en algunos puntos que veremos, lo interpreta y lo expresa únicamente desde la consecuencia de la violencia de género. Podemos afirmar en este sentido, que, desde esta ambigüedad, la ley se articula en forma de prolepsis, el tipo de anacronía de prospección que nos anticipa cómo van a suceder los hechos.

Vemos, por tanto, que se produce la prolepsis en el principio de la ley en el apartado I, en la parte de explicación legislativa, de normas que regulan actuaciones sociales necesarias para abordar problemáticas dirigidas a colectivos vulnerables, donde se nombra la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, entre otras, vinculada al ordenamiento jurídico español, vinculado a los derechos y libertades reconocidos por la Constitución Española, la Unión europea y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, individuales y colectivos. Y al final, en el Capítulo III: Estructura funcional del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, esa prospección se cumple al aplicar la concreción en materia de género (perspectiva de género) únicamente definida como violencia de género y éste será el único aspecto que la ley articulará en materia de actuación en referencia al género.

El preámbulo cita la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y, sin embargo, no hace alusión a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Este es un aspecto que llama la atención y que avala el detrimento de la perspectiva de género en la ley, pues señala que la visión de lo que se pretende articular, se basa en una percepción que no recoge la integralidad de la perspectiva de género. Y lo reconoce en el apartado II del preámbulo mediante lo siguiente: «entre las personas más vulnerables destacan las mujeres víctimas de violencia de género». Ello, sin contemplar la visión amplia de la discriminación por cuestión de género, con el peligro de no atender que la vulnerabilidad de las mujeres es generalizada dado que sufren una constante desigualdad debido a la construcción patriarcal

de la sociedad y con ello de los sistemas y las instituciones que las invisibiliza, las cuestiona, y las aparta sistemáticamente de forma indirecta.

2.4 La conexión de la Norma entre Género y Principio de Descentralización: Garantía de Derechos

En la misma línea, una de las razones que han llevado a articular esta normativa y que tiene consecuencia directa en la formulación de la misma en cuanto a la relación con el género, es la aplicación del principio de descentralización.

La ley, en su preámbulo explicita:

“Los sistemas de servicios sociales constituyen uno de los pilares del estado social y democrático de derecho surgido a partir de la aprobación de la Constitución en 1978, la cual atribuye en el artículo 148.1.20 la competencia exclusiva en materia de asistencia social a las comunidades autónomas. [...] En el artículo 25.2.e se reconoce a los municipios la competencia en esta materia, cuando indica, más concretamente, que les corresponde la evaluación y la información de situaciones de necesidad social, así como la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.”

Vemos que la ley aplica el principio de descentralización administrativa del Estado para conseguir una gestión administrativa más ágil y efectiva. En este sentido, el principio de igualdad que promulga el objeto de la ley, se entiende que, formulado en sentido amplio, incluiría las necesidades de la ciudadanía en materia de igualdad, para su detección y subsanación a su vez de forma más efectiva, interviniendo desde la política autonómica y local, tal y como se expuso en la introducción de este trabajo en las palabras de Ian Gough (2007) al enmarcar el estudio de la protección social, el cual, incluye que las políticas públicas sólo tienden al éxito cuando se analizan las necesidades sociales desde la descentralización del Estado, por tanto, desde la óptica de lo local:

“Los que satisfacen las necesidades, incluidas las políticas sociales, tendrán más probabilidades de éxito si se adaptan a los entornos locales” (p.20).

Así, las cuestiones de género, presentes en la configuración social, estarían reconducidas para ser abordadas. Sin embargo, cuestión importante es que queda pendiente reforzar las capacidades de los actores locales para que puedan hacer frente a la gestión de los servicios que la ley les atribuye, razón destacada por la que veremos, la ley, en su abordaje concreto (Capítulo III: Estructura funcional del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales) reduce la posible perspectiva de género aplicable al concepto de igualdad, promulgado (aunque no especificado desde en género) en el objeto de la ley, únicamente a la violencia de género y a la sensibilización, en su aplicación concreta desde los organismos locales.

José Folgado Blanco (2011) explica la problemática de las previsiones de gasto de las administraciones locales y hace alusión a que el endeudamiento o crisis financiera de las administraciones locales repercute directamente en la ciudadanía:

“El endeudamiento de las Entidades locales y los límites al mismo fijado en la legislación de estabilidad presupuestaria es un tema de trascendencia para el funcionamiento de la economía porque se trata de la administración más cercana al ciudadano [...]. El endeudamiento en forma de más gastos financieros (intereses), restan capacidad de prestación de servicios...” (p. 79).

Es clave que la administración local, pueda disponer de los presupuestos realistas que permitan el abordaje, en este caso, de unos servicios sociales con perspectiva de género. Puede que una de las razones de disminuir dicha perspectiva en sentido amplio, al concreto centrándose en la violencia de género como competencia y actuación única por parte de la administración local en materia de género, tenga que ver, en parte, con la capacidad económica de la administración local para hacer frente a las actuaciones en materia de igualdad de género desde la necesidad de su enfoque global.

De esta manera, el enfoque de género, en cuanto a que no está concretado en la ley de forma abierta y general en su acción centrada en la tarea descentralizada, permite que sea cuestionable el compromiso de la igualdad real, si el aspecto formal (la normativa) sólo se centra en referencia a la actuación en materia de violencia de género, que estructural y

sistemática, además, sólo podrá abordarse si se tienen en cuenta todas las variables de la desigualdad de género. De esta forma, las actuaciones en materia de igualdad de género quedan sesgadas.

2.5 Aplicación de la Integralidad de la Perspectiva de Género en la Norma

Teniendo en cuenta la importancia y el mandato internacional, europeo y nacional de introducir la transversalidad de género en las normativas para aplicar la integralidad de la perspectiva de género, la ley aterriza algunos matices que parecen advertir una visión más plena del género cuando expresa, por ejemplo, en el preámbulo, apartado III: «reconocimiento del valor de las tareas de cuidados domésticos y familiares que han sido generalmente llevadas a cabo por mujeres...».

Especialmente se aprecia un enfoque de género en la ley en el Capítulo III: Estructura funcional del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Artículo 18.1. Servicios de Atención primaria, apartado g) Unidades de Igualdad: Garantizarán la perspectiva de género, promoviendo la participación, impulsando planes de igualdad y realizando actuaciones de prevención de la violencia de género y machista, entre otras, con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres de forma transversal en el conjunto de políticas públicas de ámbito local.

En este apartado, podemos observar varias características de la perspectiva de género. Por un lado, señala como un servicio concreto, las Unidades de Igualdad. Este servicio, aprobado por el Consell Valencià el 25 de agosto de 2015 se constituyó según la propia Generalitat Valenciana, «para dar cumplimiento al objetivo fijado en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de regular y hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana, establecer los principios generales que deben orientar dicha igualdad, determinar las acciones básicas que deben ser implementadas, así como establecer la organización administrativa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana». En este sentido, aboga por la necesidad de implementar planes de igualdad,

otra característica específica del enfoque de género. En estos planes, se entiende que se desarrollarán las actuaciones concretas en materia de género, sin embargo, no hace alusión a este efecto, contemplando algún ejemplo en referencia a las actuaciones previstas como intención de concretar para superar el aspecto formal de la ley.

En sentido formal, estos aparados nos muestran que la ley está teniendo en cuenta la relevancia de la transversalidad de género en cuanto a dar respuesta a la intención de implementar servicios transversales que ofrezca una garantía de igualdad de género, cumpliendo así con la inclusión del enfoque de género. Otro aspecto sería comprobar si el sentido formal de la ley, en su aplicación real es efectivo. No es objetivo de este trabajo realizar dicho análisis, pero sí observar si el aspecto formal del género tal y como está tratado en la ley, podría afectar a un mayor o menor impacto en su efectividad real, superando o no la obligada barrera de la operatividad práctica.

La Igualdad Formal es aquella que se puede observar en la normativa jurídica, en la legislación. Pretende que la aplicación de lo que se legisla sea efectiva en la vida cotidiana de la ciudadanía, por ello, es importante la ambición del trato formal que se otorga a la ley en cuanto a que esto afectará en mayor o menor medida al real cumplimiento de los objetivos y pretensiones de la misma.

Como expresa Carlos Alarcón Cabrera (1987):

“La naturaleza de la estructura social exige del derecho una actitud más o menos rígida para lograr la proyectada igualdad” (p. 35).

Marta Postigo Asenjo (2005) recomienda distinguir entre dos tipos de igualdad:

“Igualdad formal: relacionada con los principios liberales individuales, neutrales en cuanto a las diferencias, y a la prohibición de cualquier forma de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad o lengua. – Igualdad sustancial: tiene por objetivo la realización práctica de ésta a través de acciones específicas para quienes no están en la misma situación de ventaja. Puede entrañar un tipo de discriminación temporal para compensar hábitos y prácticas desventajosas

para personas de un determinado sexo, raza, nacionalidad o circunstancia física y psíquica...-

Y añade:

“Ya no se trata, únicamente, de incorporar nuevos derechos (sociales y políticos) a la ciudadanía, ni de proclamar la igualdad formal entendida como no-discriminación, sino de modificar las prácticas sociales, los hábitos y las políticas institucionales para favorecer la participación y la presencia real de los diferentes colectivos en las instituciones públicas y en las oportunidades que brinda la sociedad” (p. 34).

En este sentido, la ley puede parecer poco ambiciosa en cuanto a contemplar esa concreción referente a delimitar los servicios con perspectiva de género, corriendo el peligro de poder cuestionar si quedaría equilibrada la igualdad formal con la real. Podríamos pensar que dado que se refiere al Capítulo III: Estructura funcional del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, el aterrizaje de la descripción de acciones concretas en referencia a la igualdad de género podría definirse en otro apartado de la normativa, en el Capítulo II: Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

En cuanto a este apartado, observamos que en el artículo 36 de Prestaciones Profesionales, en el apartado c) Orientación individual, familiar o de la unidad de convivencia, no incorpora la perspectiva de género en la provisión de la orientación y el apoyo a las personas «en el ejercicio de las funciones de cuidados, afectivas, educativas y de socialización [...] cuando se den situaciones de crisis, riesgo o vulnerabilidad».

Teniendo en cuenta que estas funciones suelen desempeñarlas en una gran mayoría las mujeres (según últimos datos del Ministerio de Igualdad que datan de 2 de julio de 2018,

la excedencia por cuidado de familiares es solicitada por un 83,66% por mujeres²) y además, recordando la referencia que realiza la ley respecto a estas situaciones en el preámbulo, apartado III «reconocimiento del valor de las tareas de cuidados domésticos y familiares que han sido generalmente llevadas a cabo por mujeres...», llama la atención que a la hora de materializar ese reconocimiento en acciones/prestaciones concretas, no se haga alusión a la perspectiva de género. Observamos que lo mismo ocurre con el apartado g) mediación judicial, donde no hay alusión alguna a la perspectiva de género, ni en el apartado p) de apoyo a la inclusión social, en el que especifica la mejora de la situación «social, laboral, sanitaria, educativa, habitacional y cultural entre otras», por lo que debemos suponer que dentro del “entre otras” puede que se tenga en cuenta el género en cuanto a cómo afecta la desigualdad de género y la discriminación a todos estos ámbitos comentados; el social, el laboral, el sanitario etc.

Continuamos observando, por tanto, que en lo relativo a la determinación de acciones concretas para abordar la desigualdad de género en sentido amplio, no quedan expresadas de manera firme en la ley, porque la concreción que realiza la ley en materia de género la estipula en cuanto a violencia de género como ya se ha analizado anteriormente y vamos a continuar viendo a continuación.

Observamos, que cuando la normativa pretende atender lo concreto referente la consecuencia directa de la discriminación de género, lo vincula únicamente a la violencia de género, como vemos en el capítulo III, artículo 18.2; La atención primaria de carácter específico, apartado b) Servicios de violencia de género y machista. Desarrollará actuaciones de protección y atención integral a víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas a través de centros y programas y en el Capítulo II: Catálogo de prestaciones del Sistema

² Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Tabla actualizada a fecha 2 de julio de 2018.

Público Valenciano de Servicios Sociales, apartado e) prevención, que contiene las actuaciones «de sensibilización y promoción dirigidas a la ciudadanía [...] en materia de delitos de odio, violencia de género y machista...».

Dentro de las políticas sectoriales, Alejandra Massolo (2006) realiza una reflexión en la que identifica y concluye que las políticas locales parecerían enfocarse en las mujeres, pero sin tomar en cuenta los contextos.

“Pareciera que, al llegar al nivel local, ante la urgencia de las demandas, [...] centran la atención en aspectos muy particulares sin tomar en cuenta el contexto y demás actores presentes en el escenario. El espacio local y la identidad de género no se presentan como dimensiones articuladas, sino más bien en tensión y conflicto. En general, hay una tendencia al localismo y a una visión parcializada...” (p. 31-32).

Tener en cuenta el contexto global de la desigualdad hacia las mujeres, es lo que legitima la referencia realizada en cuanto a la importancia de que la ley sea más específica en las acciones concretas a desarrollar en materia de género, porque si la ley no centra sus esfuerzos en aterrizar de forma concreta cómo pretende obstaculizar la desigualdad hacia las mujeres (en cuanto al carácter universal que tiene la ley), no podrá contener la violencia de género desde la prevención como afirma en el apartado g) [...] actuaciones de prevención de la violencia de género y machista (capítulo III) y en el apartado e) del capítulo II del catálogo de prestaciones: prevención, y por tanto, el objetivo de alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en que basa la ley parte de su argumentativa para el cumplimiento de la transversalidad y perspectiva de género, quedará cuestionado en cuanto a preguntarse si la normativa podría haber sido más ambiciosa en este sentido. Atajar el contexto social desigual en forma de actuaciones más definidas, podría ser clave para lograr transitar de la igualdad formal (que promulga la ley) a la igualdad real.

Dado que la normativa que estamos analizando interpela, como hemos visto, a la descentralización de las políticas para la consecución de la igualdad real, Ana Laura Rodríguez Gustá (2019) en el estudio: “Institucionalidad de género y políticas públicas para

la igualdad”, matiza cómo es el traslado de la igualdad formal a la real en la administración local con referencias a varios autores y autoras:

“Generalmente, estas políticas “para mujeres” tienen como audiencia la población femenina, pero raramente involucran cambios en la gestión municipal. Como consecuencia, los servicios que deberían atender las necesidades de las mujeres no resultan reforzados ni jerarquizados” (p.50).

A título ilustrativo, Gloria Guadarrama Sánchez (Gloria Guadarrama Sánchez 2012, citado en Ana Laura Rodríguez Gustá, 2019) encontró que los programas de género en municipios [...] están centrados en las necesidades, pero sin acciones adicionales promotoras de transformaciones de mediano plazo. En sus palabras:

“Las prácticas responden a la visión de las mujeres como beneficiarias, que, si bien extienden las oportunidades de acceso a la salud o a la educación, no necesariamente tienen incidencia en erradicar las causas de la inequidad y la discriminación” (p. 50).

En virtud de ello, esta autora concluye que las intervenciones son limitadas y lo ejemplifica con las políticas de violencia que quedan reducidas a prácticas de sensibilización sin asesoría ni amparo a las mujeres afectadas.

Desde esta perspectiva, Lía Norverto y Alejandr  Vald s (L a Norverto, 2007 y Alejandra Vald s, 2008 citado en Ana Laura Rodr guez Gust , 2019) exponen lo siguiente:

“Las pol ticas de g nero suponen, tambi n, una adecuada implementaci n para que los marcos de sentido no se evaporen ni se subviertan en la pr ctica. En gran medida, esto es resultado de las capacidades institucionales, lo cual es problem tico ya que la institucionalidad local se distingue m s por sus debilidades que por sus fortalezas” (p. 50).

Para comprender por qu  la ley puede considerarse poco ambiciosa en cuanto a la transversalidad y enfoque de g nero aplicado a las actuaciones reales, Virginia Guzm n (1996) se ala varias causas que todav a dificultan la construcci n de una equidad de g nero:

“Algunas de ellas son el producto de la inercia de los sistemas cognoscitivos y valóricos, otras responden al rechazo de los hombres a ver afectados sus intereses en los espacios públicos y privados y otras tienen un sustrato más profundo. Se asocian al temor que generan los cambios en la identidad del otro al cuestionar la propia identidad, y a la incertidumbre sobre el propio sentido y consecuencias de las transformaciones en curso” (p. 215).

Cándida Gago García y Juana M^a Rodríguez Moya (2014) exponen algunas de las cuestiones a las que una normativa con perspectiva de género debe responder desde la práctica de su desarrollo en lo local:

“¿A qué tipo de necesidades o aspiraciones contribuyen las acciones municipales?; ¿se trata de acciones encaminadas a satisfacer las necesidades prácticas de género o los intereses estratégicos?; ¿estas acciones contribuyen al empoderamiento?” (p. 345).

Para observar qué herramientas utiliza la ley encaminadas a satisfacer las necesidades prácticas de género, es imprescindible analizar si la normativa ha tenido en cuenta en su formulación el derecho desigual para determinar acciones de discriminación positiva.

Carlos Alarcón Cabrera (1987) analiza qué es el derecho desigual y por qué es importante en cuanto se traslada a la consecución de una igualdad real.

“El derecho igual desconoce, asimismo, la desigualdad en las necesidades [...] En consecuencia, el derecho igual revierte en una acentuación de las desigualdades, las cuales sólo podrían evitarse mediante un derecho desigual o equitativo, en cuanto que depende de los cambios sociales y las situaciones históricas y reconoce para cada uno lo justo, lo que se le debe, de tal modo que la dirección de la comunidad reparta las cargas y los bienes desigualmente para procurar una verdadera igualdad distributiva” (p. 36).

Las acciones positivas son herramientas que permiten conceder ventajas al sexo femenino en cuanto a que éstas proporcionan el derecho desigual que permite equiparar la

desventaja del sexo femenino. En este sentido, Magdalena Lorenzo Rodríguez Armas (2007) explica que, el Tribunal Constitucional, ha considerado necesario ese trato favorable con las siguientes concreciones:

“La constatación de que la posición social debilitada de la mujer es un hecho contrastable, derivado de prácticas y mentalidades que aún no se han eliminado. La acción positiva trata de contrarrestar estas prácticas y mentalidades. [...] La acción positiva se legitima no en función de las características individuales de la persona beneficiaria, sino en función de su pertenencia a un colectivo discriminado, en este caso, las mujeres. Y para que este derecho desigual, no perjudique al otro sexo, el masculino, en este caso, el Tribunal Constitucional establece la Jurisprudencia “equiparadora”. De esta manera la acción positiva comporta medidas favorables para un grupo (sexo femenino) sin perjudicar a los pertenecientes al sexo masculino” (p. 191).

Observamos referente a estas herramientas de acción positiva, que la normativa las nombra en el Capítulo IV: estructura territorial del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, artículo 26: Mapa de servicios sociales de la Comunidad Valenciana, que dice en el punto 3. «[...] con objeto de garantizar una oferta de prestaciones y servicios equivalente al existente en todo el territorio, y pudiendo establecerse para ello medidas de discriminación positiva de acuerdo con umbrales de población y ratios profesionales». Si bien no especifica acciones de discriminación positiva en relación al género, sino que lo explicita de forma general asimilando todos los colectivos en situación de desventaja y discriminados, (ya que es una normativa dirigida con carácter notorio a colectivos vulnerables), podemos entender que la elaboración de acciones positivas en referencia al género estarían incluidas.

En referencia a la recogida de datos para la elaboración de informes de impacto de género, en el Capítulo IV: estructura territorial del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, artículo 28: Competencias de la Generalitat, apartado m), se tiene en cuenta de forma especial la variable género: «el diseño de instrumentos de recogida de información y su tratamiento estadístico, con desagregación de datos por género...».

En el título VI: Financiación. Artículo 104. Fuentes de financiación. Apartado 1. Explica cómo se pretende financiar el sistema de servicios sociales. En el apartado a y b, especifica que será mediante “los presupuestos de la Generalitat y los de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, y el resto de entidades locales de la Comunitat Valenciana”.

Yolanda Jubeto Ruíz (2017) explica el motivo por el que las políticas públicas han comenzado a incorporar la perspectiva de género en los presupuestos:

“Así, el motivo principal que ha impulsado el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de la equidad de género ha sido la constatación de las desigualdades existentes en las condiciones de vida entre mujeres y hombres en todas las sociedades del mundo. [...] A partir del conocimiento de las diferentes vivencias, posiciones y roles que mujeres y hombres desempeñan en las sociedades androcéntricas, los PEG pretenden analizar si los gastos que realizan las administraciones públicas, y las fuentes de financiación que utilizan, contribuyen a disminuir, aumentar o mantener las disparidades existentes en las condiciones de vida de mujeres y hombres, haciendo especial hincapié en las consecuencias para las mujeres de la tradicional división sexual del trabajo, tanto en la esfera productiva como reproductiva. Estas desigualdades impactan en todos los ámbitos de intervención pública, y es lo que ha motivado la incorporación de las lentes de género en las políticas públicas y en los recursos vinculados con las mismas. Estos análisis nos permiten, asimismo, conocer bajo qué supuestos de género se planifican las políticas públicas" (p.302).

La presente normativa no especifica si los presupuestos destinados a estos servicios se realizarán desde un enfoque de género para que los vínculos entre la política presupuestaria y la de equidad de género tengan el impacto deseado en la igualdad que se pretende alcanzar de forma transversal en la ley. En este sentido, dado que el desarrollo presupuestario corresponde a la Consellería de Hacienda, la Orden 10/2019, de 16 de septiembre de 2019, de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2020, en

artículo 3.2.1 pretende la elaboración del Informe de Impacto de Género de los Presupuestos de la Generalitat, en los términos que determine la Comisión de Impacto de Género, teniendo en cuenta así, la integración de la perspectiva de género en los presupuestos.

Este hecho indica que la presente ley añadido a la recogida de información y su tratamiento estadístico, con desagregación de datos por género... (Capítulo IV: estructura territorial del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, artículo 28: Competencias de la Generalitat, apartado m), para el informe de impacto de género, tiene en cuenta la impresión de género en los presupuestos.

A colación, en el Título VII: Calidad, investigación, innovación, formación y evaluación. En el Capítulo I artículo 116. Objetivos de la calidad de los servicios sociales apartado 4 g) establece como objetivo la perspectiva de género en la gestión, la organización y la prestación de servicios.

Continúa en el artículo 120. Objetivos de la investigación y la innovación en servicios sociales donde no hay alusión a la perspectiva de género, como tampoco la hay en el artículo 121. Formación. En este artículo, es reseñable en el punto 4 que especifica lo siguiente «en el caso de las personas cuidadoras en el entorno familiar, se elaborará un plan integral de formación específica en cuidados y atención a personas en situación de dependencia». Que no se introduzca referencia alguna al género, tras afirmar en el preámbulo, apartado III el «reconocimiento del valor de las tareas de cuidados domésticos y familiares que han sido generalmente llevadas a cabo por mujeres...», resulta notorio.

En el Capítulo III: de la evaluación, artículo 24. Objetivos de la evaluación, realiza una exposición general: «evaluar las políticas sociales, los planes de actuación, el funcionamiento de las prestaciones y la idoneidad de los servicios dispuestos en los distintos tipos de prestaciones» (apartado a), «así como implantar sistemas de medición de la actividad por medio del establecimiento de instrumentos e indicadores...» (apartado c), que no incluya específicamente el género no es indicativo de que no lo tenga presente ya que el hecho de que en Capítulo IV: estructura territorial del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, artículo 28: Competencias de la Generalitat, apartado m) sí la incluya cuando dice: «la recogida de

información y su tratamiento estadístico, con desagregación de datos por género» es significativo, dado que algunas de las herramientas que forman parte de la evaluación son la recogida de datos en la que se tendrá en cuenta la desagregación por género.

En cuanto al tratamiento del lenguaje en la ley, se observa que denota inclusión, la ley es ampliamente cuidadosa con este aspecto y puede percibirse que se presenta motivadora a tener en cuenta la integralidad.

Lucía Banus y María Martina Garra (2016) exponen la necesidad del lenguaje inclusivo en las normativas en cuanto a que las leyes se efectúan para todas las personas y, por tanto, deben tener en cuenta en su forma de dirigirse a las mismas, desde toda la diversidad cuando dicen:

“El lenguaje es inclusivo cuando no invisibiliza o subordina a un grupo dentro de otro. Dando un paso más y centrándonos en la discriminación por género, es necesario tener en cuenta los estereotipos sexistas que se reproducen en el lenguaje, el cual, «describe al mundo social. Las palabras expresan pensamientos, comunican ideas, conceptos, valores y creencias, y en ese proceso de descripción, la realidad también se construye dado que la lingüística del discurso no solo representa, sino que también configura. Se trata de un mecanismo que permite la creación y delimitación de categorías como, en el caso, “hombre” y “mujer”. Es por tanto que ha de tenerse en cuenta en la redacción de un texto el sexismo lingüístico” (p.3).

El sexismo lingüístico se relata de acuerdo con María José Sánchez-Apellániz (María José Sánchez Apellániz 2009, citado en María Luisa Jiménez Rodrigo, Marisa Román Onsalo y Joaquín Traverso Cortés, 2011) de la siguiente manera:

“Uso discriminatorio del lenguaje por razón de sexo, que puede contribuir a destacar el papel preponderante de un sexo respecto a otro, o a ocultar la presencia o contribución de uno de ellos” (p.175).

Así mismo, Teresa Meana Suárez, (2016) explica cómo se caracterizan las manifestaciones del sexismo en el lenguaje:

“Las principales manifestaciones del sexismo en el lenguaje son: la utilización del género gramatical masculino como genérico, lo que contribuye al ocultamiento y exclusión de las mujeres y sus experiencias; y el uso de duales-aparentes, que adquieren significado diferente si se encuentran en masculino o femenino, y que generalmente expresan menosprecio hacia las mujeres” (p.00)

Observamos que la presente ley, está formulada y redactada en su totalidad con un lenguaje inclusivo que tiene en cuenta el género. Un ejemplo de ello es el artículo 18, apartado b) cuando expresa «desarrollará actuaciones de protección y atención integral a las víctimas de violencia de género y machista y a sus hijos e hijas... o en el artículo 69. Personal profesional de referencia cuando dice la trabajadora o el trabajador social [...] el equipo de profesionales...».

Tras analizar la ley en cuanto a la transversalidad de género en todas sus variables, aunque el determinado análisis ha obligado a exponer algunas conclusiones previas, se procede a elaborar un apartado de conclusiones globales a modo de aterrizar en el enfoque de su impacto. Del mismo modo, a continuación, se elaborará un apartado de propuestas.

3. Conclusiones: Perspectiva de su impacto

3.1 Principales conclusiones

Una vez realizado el análisis para poder determinar, como objetivo de este trabajo, el grado de perspectiva de género de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, (según la clasificación de políticas de género de Naila Kabeer), se procede a exponer las conclusiones principales a las que se ha llegado una vez terminado el examen a la ley sobre su enfoque de género articulado.

Ofrecer respuestas efectivas a la desigualdad de género, hace necesario tener en cuenta el enfoque global de género. La visión parcial de género en la ley puede implicar la percepción de la ciudadanía de una ayuda social por la necesidad de apoyo, no de un derecho, sin considerarla una solución real, sino un paliativo temporal que no revierte de

forma efectiva las necesidades. Es por ello, que, el enfoque de género debe completarse, porque la administración debe ser capaz de asegurar un resultado efectivo de sus acciones, de sus políticas, y no cualquier resultado sino aquel que sea el oportuno. Conviene destacar que existe un salto importante en cuanto a la intención de adoptar el enfoque de género en esta nueva ley de servicios sociales, en comparación con la anterior legislación en la misma materia, la cual, no disponía de enfoque transversal de género alguno, por lo que éste es un aspecto positivo a resaltar.

Se concluye que la normativa, en general, cumple con la incorporación a la misma de la transversalidad de género en un aspecto formal, lo hemos podido observar en cuanto a que nombra y tiene en cuenta la igualdad y está redactada utilizando un lenguaje inclusivo, sin embargo, no se visibiliza la intención de superar ese aspecto de hecho. La importancia de ambicionar en el aspecto formal en cuestión de género en la ley es necesario en cuanto a que éste afectará directamente a su efectividad real.

En este sentido, hemos observado que la ley puede ser un poco reduccionista en cuanto a la perspectiva de género aplicable al concepto de igualdad que pretende promover, siendo éste formulado en mayor medida en un continuo en la norma de forma general y no especificando la variable “género” en lo que precede a su construcción global y completa. Así, puede percibirse que, en cierto modo, rebaja todo lo que concierne y deriva del concepto “desigualdad de género” a la violencia de género y a la sensibilización sobre ella. Por ello, podríamos afirmar que parece que la norma está más enfocada a tratar una de las consecuencias de la desigualdad de género como es la violencia de género y no tanto todos los aspectos que influyen en la discriminación por género, que, con el deber de incorporar a transversalidad de género, tendría la ley que tener en cuenta. Se concluye, por tanto, la necesidad de que la ley pudiera abordar la cuestión de género desde un enfoque global del mismo incorporando y especificando herramientas que no sólo combatan la violencia de género sino cualquier tipo de discriminación y desigualdad directamente relacionada con la cuestión de género.

El escaso grado de atención a esta globalidad de la “cuestión de género”, pone de manifiesto el cuestionamiento sobre si se ha tenido en cuenta a la hora de la formulación y redacción de la norma, el derecho antidiscriminatorio, el cual, es indispensable, para incorporar adecuadamente la perspectiva de género en la normativa.

Siendo una norma de política social, tener en cuenta la feminización de la pobreza, es decir, la doble desventaja existente para las mujeres cuando unimos la cuestión de género y la cuestión social de vulnerabilidad derivada de la desigualdad de género es necesaria para combatir la pobreza y la exclusión social que se pretende al ser una política de protección social, que, aunque universal, está especialmente dirigida a la población socialmente vulnerable. Por tanto, si son las mujeres por su situación de desventaja social asociada a su género, quienes sufren en mayor medida la pobreza y la vulnerabilidad, son las especiales destinatarias de este tipo de políticas sociales. Por ello, se concluye que podría considerarse preciso tener en cuenta en la norma, la feminización de la pobreza, ya que ello, hubiese podido actuar como refuerzo en cuanto a cómo articular la perspectiva de género en la ley, y hubiese servido, a su vez, como justificación de haber otorgado un fuerte y marcado rasgo de género en ella.

La ley sí dispone de una perspectiva de género formal, cumpliendo así con las orientaciones internacionales y europeas de incorporar la transversalidad de género en las políticas, pero podría ser cuestionable el hecho de su efectividad real en la sociedad. De acuerdo con el principio de descentralización del estado, los actores locales van a implementar dicha ley y si ésta, en el ámbito general, no incorpora actuaciones a desarrollar más concretas con un enfoque que atienda la globalidad de la cuestión de género y no sólo la violencia de género, no queda claro, que el hecho de haber incorporado el enfoque de género en la ley con el objetivo de forma transversal de atajar las desigualdades de género, tenga un impacto real en la vida de las personas y por tanto, con ello, transforme la sociedad hacia una sociedad más igualitaria.

Los resultados de la incorporación de la transversalidad de género en la norma que nos ocupa de acuerdo con el proceso de transversalización de la perspectiva de género en

las políticas, siguiendo la clasificación de la autora Naila Kabeer para determinar el grado de inclusión de género aplicado a políticas sociales, nos llevan a concluir que, en concreto la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, no es una norma ciega al género, dado que reconoce las necesidades específicas del mismo. Es por tanto, una política social con conciencia de género, que reconoce que las mujeres y los hombres son agentes del desarrollo y ambos tienen necesidades, intereses y prioridades específicas de género, y dentro de esta clasificación, se podría determinar además, cómo política específica de género, porque reconoce el objetivo de adoptar medidas que benefician específicamente a las mujeres pero, no interviene en la modificación de las relaciones de poder establecidas entre los géneros al no ser ambiciosa en su grado de incorporación del enfoque de género, quedándose en un enfoque parcial (atendiendo en gran medida únicamente la variable de la violencia de género) y no global, impactando por tanto de forma incompleta en su objetivo de que la transversalidad de género aplicada a la norma, pueda promover de forma efectiva la igualdad.

3.2. *Propuestas de articulación*

En el caso de las mujeres, dada su realidad de desigualdad por su condición de género, y teniendo en cuenta que se trata de una política social universal, se hace necesario que ésta contemple el riesgo añadido de vulnerabilidad social por cuestión de género y establezca mecanismos para revertirlo. Por ello, y tras tener en cuenta las conclusiones principales adoptadas tras el análisis de la ley que nos ocupa, se procede a realizar las siguientes propuestas, las cuales, se efectúan desde un enfoque constructivo en virtud de poder incorporar, si fuese el caso, algunos aspectos a la normativa:

- Incorporar un enfoque transversal de género más ambicioso, especificando las cuestiones concretas de género cuando la ley tiene en cuenta y nombra la igualdad.
- Realizar la aplicación transversal de género en la normativa, teniendo en cuenta una mayor incorporación, aplicación y formulación del derecho antidiscriminación.

- Materializar la transversalidad de género aplicada en la ley en herramientas e instrumentos de acción más concretas, ampliándolas a las de la violencia de género: integrar el enfoque de género en la ley para advertir que se ha hecho de una manera consciente y que, con ello, pueda superar el plano formal, podría paliarse especificando la palabra género tras la palabra Igualdad, incorporar medidas de conciliación al reconocer que son las mujeres las cuidadoras, medidas de protección desde la prevención mediante un enfoque global de género y/o tener en cuenta los contextos de desigualdad incorporando otras variables que afectan a lo social.
- Incorporar la feminización de la pobreza al preámbulo de la ley, para tener en cuenta sus efectos en la transversalidad de género que se aplica a la norma:
 tener en cuenta la feminización de la pobreza e incorporar herramientas y mecanismos sociales de género para abordarla. Aprovechar la ley para dar valor a lo que se ha considerado devaluado por ser realizado por mujeres como los cuidados, incorporar estrategias políticas y discursivas de los organismos de igualdad y del feminismo. Vincular democracia con género. Políticas de sensibilización con enfoque global de género como la corresponsabilidad, la conciliación, los cuidados.
- Visibilizar el enfoque de género en las acciones y herramientas propuestas.
- Reforzar procesos de participación ciudadana con flujos de información sobre derechos con enfoque de género podrían ayudar a construir espacios comunicativos donde las personas sean capaces de sentirse sujetos de derechos.
- Incorporar mecanismos de detección de desigualdades sociales a consecuencia de la desigualdad de género y aplicar herramientas para hacer efectiva la integralidad, es decir, el avance en materia de igualdad de género en todas las variables que afectan al desarrollo (empleo, salud, vivienda...). La presente normativa debe responder en mayor medida a la integralidad e incorporar la transversalidad de género a otras políticas que afectan a la variable social.
- Desde esta necesidad de ser más transversal, existe la oportunidad de detallar en mayor medida los servicios a ofrecer para asegurar que la implementación de la ley

desde su principio de descentralización para la garantía de derechos, será efectiva.

Por ejemplo, incorporar servicios de conciliación, y/o la actuación en el ámbito de la sensibilización en la igualdad de género y en la corresponsabilidad es fundamental.

La visión de futuro sería articular políticas sociales con enfoque de género y con unos fines concretos y transversales enlazados a otras políticas, e intentar superar la definición e implementación de unos servicios sociales como un conjunto de medidas formuladas y diseñadas desde un concepto de “ayudar”, con la necesidad de superarse como paliativo puntual y conseguir la conjunción entre transversalidad e integralidad para la garantía de derechos.

Bibliografía

Alarcon Cabrera, C. (1987). Reflexiones sobre la igualdad material. *Anuario de Filosofía Del Derecho*, 4, 31–42.

Alemán Bracho, M. (1995). La política de asistencia social desde la transición democrática,. *Revista de Estudios Políticos*, 87, 199–220.

Alfama, E., y Alonso, A. (2015). Las políticas de género en la administración pública. Una introducción. *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, 8, 24–41.

Avendaño, M. P. (2010). *De la igualdad a la igualdad de genero*. 219–226.

Banus, L., y Martina Garra, M. (2016). Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito de la Administración Pública. *Cartapacio de Derecho: Revista Virtual de La Facultad de Derecho*, 30(30), 1.

Blanco, J. F. (2011). Endeudamiento de las Entidades locales y estabilidad presupuestaria. *Revista Española de Control Externo*, 13, 79–96.

Bordi, I. V. (2008). Entre las desigualdades de género: un lugar para las mujeres pobres en la seguridad alimentaria y el combate al hambre. *Argumentos : Estudios Críticos de La Sociedad*, 21(57), 141–170.

Cano, J. M. (2012). *La Teoría de la Política social*. 541–550.

- CEPAL, y UNIFEM. (2004). Entender la pobreza desde la perspectiva de género. In *Mujer y desarrollo* (Vol. 52).
- Claudia, P., y Kaen, I. (2017). Feminización de la pobreza : intervenciones posibles. *Margen: Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, 87, 1–11.
- Cobrerros Mendazona, E. (2007). Discriminación por indiferenciación: estudio y propuesta. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 27(81), 71–114.
- Cruz, C. N., y Petrizzo, M. (1994). El estudio de las políticas públicas : el estado de la disciplina y la consolidación democrática en América Latina. *Universidad Nacional Autónoma de México, March*, 1–27. file:///C:/Users/dwrri/Downloads/PolíticasPublicas (1).pdf
- Fernández, S. (2010). La Realidad Comunitaria de la Política Social: desafíos teóricos y metodológicos para el Trabajo Social. *Documentos de Trabajo Social*, 47, 31–42. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWksuona_gAhUkBWMBHRkoDrUQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3654027.pdf&usg=AOvVaw2_m eLYobsdX_etf9xy0dVa
- García, C. G., y Moya, J. M. R. (2014). Presente de las políticas de igualdad en ámbito local de la comunidad de madrid. *Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles*, 66, 341–367. <https://doi.org/10.21138/bage.1792>
- González Oñate, C. (1995). Diferencia o desigualdad: la cuestión de género. *ESTUDIOS*, 5(Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba).
- Gough, I. (2007). Los Estados de bienestar europeos : lecciones para países en desarrollo. *Papeles. Traducción de Berna Wang*, 99, 13–39. http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/17061/original/Estados_de_bienestar_europeos.pdf
- Guadarrama-Sánchez, G. J. (2012). Acuerdos operativos y capacidades de los organismos de la mujer. La institucionalización del género en los municipios mexiquenses. *Economía Sociedad y Territorio*, 12, 215–247. <https://doi.org/10.22136/est00201291>
- Guzmán, V. (1996). La Equidad de Género como tema de debate y de Políticas Públicas.

Encrucijadas Del Saber, Los Estudios de Género En Las Ciencias Sociales., 26(4), 213–230.

Jimenez, L. (2016). *Género En Los Proyectos De Cooperación Internacional Para El Desarrollo: Una Cuestión Aún Pendiente*. 1–73. [http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificación estratégica por sectores/Informe genero definitivo.pdf](http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificación%20estratégica%20por%20sectores/Informe%20genero%20definitivo.pdf)

Jubeto Ruiz, Y. (2017). El análisis presupuestario con enfoque de género: un instrumento feminista clave para avanzar en la equidad socioeconómica. *Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía*, 91, 300–329.

Lorenzo Rodríguez-Armas, M. (2007). La igualdad real y efectiva desde la perspectiva del género en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán y Tribunal Constitucional español. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, 40, 181–194.

Massolo, A. (2006). Nueva institucionalidad local de género en América Latina. *Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Las Naciones Unidas Para La Promoción de La Mujer (INSTRAW) y La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)*, 121.

Naciones Unidas. Traducción de Olivera Poll, A. (1996). La Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer. *Estudios Geográficos*, 57(222), 151–155.

ONU Mujeres. (2018). HACER LAS PROMESAS REALIDAD: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. *Www.Unwomen.Org/Sdg-Report*, 1, 24. <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-summary-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=3530>

Postigo Asenjo, M. (2005). La conquista de la igualdad y las acciones afirmativas: de la igualdad formal a la igualdad sustancial. *Clepsydra: Revista de Estudios de Género y Teoría Feminista*, 4, 33–46.

Rey, F. (2011). ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad constitucional? *Anales de*

- La Cátedra Francisco Suárez*, 45(45), 167–181. <https://doi.org/10.30827/acfs.v45i0.529>
- Rodríguez Gustá, A. L. (2019). Institucionalidad de Género y Políticas Públicas para la Igualdad: Temáticas y abordajes de las investigaciones del ámbito local. *Universidad de San Martín*, 4, 41–62.
- Ruiz, J. M. G. (2013). La interpretación de las normas bajo una perspectiva de género. *Universidad de Granada.*, 1–34.
- Ruiz, M. M. (2009). El tratamiento jurídico del género en los servicios sociales : evolución del marco normativo y nueva posición de la mujer ante la demanda y prestación de los servicios sociales. *Aequalitas: Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Hombres*, 25, 28–39.
- Santaolalla López, F. (1991). Exposiciones de motivos de las leyes: motivos para su eliminación. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 11(33), 47–64.
- Suárez, T. M. (2016). Las palabras no se las lleva el viento. por un uso no sexista de la lengua. *Ayuntamiento de Quart de Poblet*, 00–00. <https://www.primerahora.com/estilos-de-vida/salud/nota/laspalabrasnoselasllevalviento-1235653/>
- Téllez Infantes, A. (2001). Trabajo y representaciones ideológicas de género: propuesta para un posicionamiento analítico desde la antropología cultural. *Gazeta de Antropología*, 17, 1–14.
- Traverso Cortés, J. (2009). Responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad social de la empresa (RSE). In *Manual de agentes de igualdad*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4178129>
- Uribe, I. R. (2006). *DIMENSIONES PARA LA DEMOCRACIA . ESPACIOS Y CRITERIOS CRIM* , Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias . UNAM , Universidad Nacional Autónoma de México , Campus Morelos , Cuernavaca ISBN 970-32-3480-1 *Descriptores Temáticos : Sistemas Polític.*
- Winchester, L., Gallicchio, E., y Claeh, E. S. U. R. (2003). Territorio local y desarrollo Experiencias en Chile y Uruguay. *Colección Estudios Sociales Ediciones SUR / CLAEH*, 1–275.

Anexo 1

Num. 8491 / 21.02.2019



10095

Article 34. Formes de provisió de les prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

CAPÍTOL II. Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 35. Catàleg de Prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 36. Prestacions professionals

Article 37. Prestacions econòmiques

Article 38. Prestacions tecnològiques

CAPÍTOL III. Cartera de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 39. Cartera de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 40. Actualització de la Cartera de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 41. Carteres de prestacions de caràcter zonal

TÍTOL III. PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ, ORDENACIÓ I INTERVENCIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

CAPÍTOL I. Planificació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 42. Disposicions generals

Article 43. Principis de la planificació

Article 44. Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Article 45. Abast del Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Article 46. Vigència del Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Article 47. Plans estratègics de caràcter zonal

CAPÍTOL II. Coordinació, col·laboració i cooperació interadministrativa i interdepartamental

Article 48. Coordinació, col·laboració i cooperació entre les administracions públiques en l'àmbit dels serveis socials

Article 49. Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa en Serveis Socials

Artículo 34. Formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

CAPÍTULO II. Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 35. Catálogo de Prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 36. Prestaciones profesionales

Artículo 37. Prestaciones económicas

Artículo 38. Prestaciones tecnológicas

CAPÍTULO III. Cartera de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 39. Cartera de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 40. Actualización de la Cartera de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 41. Carteras de prestaciones de carácter zonal

TÍTULO III. PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ORDENACIÓN E INTERVENCIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO I. Planificación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 42. Disposiciones generales

Artículo 43. Principios de la planificación

Artículo 44. Plan estratégico de servicios sociales de la Comunitat Valenciana

Artículo 45. Alcance del Plan estratégico de servicios sociales de la Comunitat Valenciana

Artículo 46. Vigencia del Plan estratégico de servicios sociales de la Comunitat Valenciana

Artículo 47. Planes estratégicos de carácter zonal

CAPÍTULO II. Coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa e interdepartamental

Artículo 48. Coordinación, colaboración y cooperación entre las administraciones públicas en el ámbito de los servicios sociales

Artículo 49. Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en Servicios Sociales

Article 50. Coordinació interdepartamental
Article 51. Coordinació, col·laboració i cooperació entre el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el sistema valencià de salut

Article 52. Coordinació, col·laboració i cooperació entre el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el sistema educatiu valencià

Article 53. Coordinació, col·laboració i cooperació entre el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el sistema valencià d'ocupació i formació

Article 54. Coordinació, col·laboració i cooperació entre el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el sistema valencià d'habitatge

Article 55.

Article 56. Coordinació tècnica

CAPÍTOL III. Ordenació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 57. Registre general de titulars d'activitats, serveis i centres de serveis socials

Article 58. Autorització

Article 59. Condicions materials i funcionals

Article 60. Declaració responsable

Article 61. Comunicació prèvia

Article 62. Falta d'autorització o declaració responsable

Article 63. Acreditació

CAPÍTOL IV. Intervenció de les persones professionals de serveis socials i instruments tècnics

Secció primera. Equips professionals

Article 64. Equip de professionals de la zona bàsica de serveis socials

Article 65. Ràtio de l'equip de professionals de la zona bàsica de serveis socials

Article 66. Personal professional de l'àrea de serveis socials

Article 67. Equip de professionals del departament de serveis socials

Artículo 50. Coordinación interdepartamental

Artículo 51. Coordinación, colaboración y cooperación entre el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y el sistema valenciano de salud

Artículo 52. Coordinación, colaboración y cooperación entre el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y el sistema educativo valenciano

Artículo 53. Coordinación, colaboración y cooperación entre el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y el sistema valenciano de empleo y formación

Artículo 54. Coordinación, colaboración y cooperación entre el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y el sistema valenciano de vivienda

Artículo 55.

Artículo 56. Coordinación técnica

CAPÍTULO III. Ordenación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 57. Registro general de titulares de actividades, servicios y centros de servicios sociales

Artículo 58. Autorización

Artículo 59. Condiciones materiales y funcionales

Artículo 60. Declaración responsable

Artículo 61. Comunicación previa

Artículo 62. Falta de autorización o declaración responsable

Artículo 63. Acreditación

CAPÍTULO IV. Intervención de las personas profesionales de servicios sociales e instrumentos técnicos

Sección primera. Equipos profesionales

Artículo 64. Equipo de profesionales de la zona básica de servicios sociales

Artículo 65. Ratio del equipo de profesionales de la zona básica de servicios sociales

Artículo 66. Equipo de profesionales del área de servicios sociales

Artículo 67. Equipo de profesionales de la zona básica de servicios sociales



DIARI OFICIAL

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Num. 8491 / 21.02.2019

10096

Secció segona. Intervenció professional

Article 68. De la intervenció

Article 69. Persona professional de referència

Article 70. Urgència social

Secció tercera. Instruments tècnics

Article 71. Instruments tècnics

Article 72. Targeta d'informació personalitzada

Article 73. Història social única

Article 74. Dret d'accés de les persones usuàries a la història social única

Article 75. Dret d'accés de les persones professionals a la història social única

Article 76. Termini de conservació de la història social única

Article 77. Custòdia i seguretat de la història social única

Article 78. El Pla personalitzat d'intervenció social

Article 79. Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials

Secció quarta. Garanties i condicions de suport a la intervenció

Article 80. Autoritat

Article 81. Estabilitat laboral i qualitat de l'ocupació de les persones professionals dels serveis socials

Article 82. Mobilitat del personal funcionari del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Article 83. Ètica professional

Article 84. Comitè d'Ètica dels Serveis Socials

TÍTOL IV. COL·LABORACIÓ DE LA INICIATIVA PRIVADA

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 85. Col·laboració de la iniciativa privada

Article 86. Clàusules socials

CAPÍTOL II. Acció concertada amb la iniciativa social

Article 87. Concepte, règim general i principis de l'acció concertada

Sección segunda. Intervención profesional

Artículo 68. De la intervención

Artículo 69. Persona profesional de referencia

Artículo 70. Urgencia social

Sección tercera. Instrumentos técnicos

Artículo 71. Instrumentos técnicos

Artículo 72. Tarjeta de información personalizada

Artículo 73. Historia social única

Artículo 74. Derecho de acceso de las personas usuarias a la historia social única

Artículo 75. Derecho de acceso de las personas profesionales a la historia social única

Artículo 76. Plazo de conservación de la historia social única

Artículo 77. Custodia y seguridad de la historia social única

Artículo 78. El Plan personalizado de intervención social

Artículo 79. Sistema de Información Valenciano en Servicios Sociales

Sección cuarta. Garantías y condiciones de apoyo a la intervención

Artículo 80. Autoridad

Artículo 81. Estabilidad laboral y calidad del empleo de las personas profesionales de los servicios sociales

Artículo 82. Movilidad del personal funcionario del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales

Artículo 83. Ética profesional

Artículo 84. Comité de Ética de los Servicios Sociales

TÍTULO IV. COLABORACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 85. Colaboración de la iniciativa privada

Artículo 86. Cláusulas sociales

CAPÍTULO II. Acción concertada con la iniciativa social

Artículo 87. Concepto, régimen general y principios de la acción concertada

Article 88. Àmbit objectiu
Article 89. Requisits d'accés al règim de concert
Article 90. Durada dels concerts
Article 91. Pagament delegat
CAPÍTOL III. Contractació amb la iniciativa privada
Article 92. Contractació amb la iniciativa privada
CAPÍTOL IV. Foment de la iniciativa social
Article 93. Foment de la iniciativa social

TÍTOL V. PARTICIPACIÓ
Article 94. Disposicions generals
Article 95. Òrgans de participació
Article 96. Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials
Article 97. Organització i funcionament del Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials
Article 98. Estructura del Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials
Article 99. Els consells locals d'inclusió i drets socials d'àmbit local o zonal
Article 100. Processos de participació
Article 101. Participació en l'àmbit dels centres
Article 102. Dret d'accés a la documentació administrativa
Article 103. Del voluntariat

TÍTOL VI. FINANÇAMENT
Article 104. Fonts de finançament
Article 105. Obligacions de les administracions públiques en matèria de finançament
Article 106. Sistema de finançament i principis
Article 107. Finançament de personal
Article 108. Finançament de prestacions
Article 109. Finançament d'infraestructures i equipaments de serveis socials
Article 110. Fórmules de col·laboració financera
Article 111. Participació econòmica de les persones usuàries en el cost del servei
Article 112. Aplicació de les taxes en matèria d'atenció social
Article 113. Determinació de la participació econòmica de les persones usuàries en el cost de la prestació de serveis

Artículo 88. Ámbito objetivo
Artículo 89. Requisitos de acceso al régimen de concierto
Artículo 90. Duración de los conciertos
Artículo 91. Pago delegado
CAPÍTULO III. Contratación con la iniciativa privada
Artículo 92. Contratación con la iniciativa privada
CAPÍTULO IV. Fomento de la iniciativa social
Artículo 93. Fomento de la iniciativa social

TÍTULO V. PARTICIPACIÓN
Artículo 94. Disposiciones generales
Artículo 95. Órganos de participación
Artículo 96. Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales
Artículo 97. Organización y funcionamiento del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales
Artículo 98. Estructura del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales
Artículo 99. Los consejos locales de inclusión y derechos sociales de ámbito local o zonal
Artículo 100. Procesos de participación
Artículo 101. Participación en el ámbito de los centros
Artículo 102. Derecho de acceso a la documentación administrativa
Artículo 103. Del voluntariado

TÍTULO VI. FINANCIACIÓN
Artículo 104. Fuentes de financiación
Artículo 105. Obligaciones de las administraciones públicas en materia de financiación
Artículo 106. Sistema de financiación y principios
Artículo 107. Financiación de personal
Artículo 108. Financiación de prestaciones
Artículo 109. Financiación de infraestructuras y equipamientos de servicios sociales
Artículo 110. Fórmulas de colaboración financiera
Artículo 111. Participación económica de las personas usuarias en el coste del servicio
Artículo 112. Aplicación de las tasas en materia de atención social
Artículo 113. Determinación de la participación económica de las personas usuarias en el coste de la prestación de servicios



Article 114. Exempcions i bonificacions

TÍTOL VII. QUALITAT, INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ, FORMACIÓ I AVALUACIÓ
CAPÍTOL I. De la qualitat
Article 115. Qualitat en serveis socials
Article 116. Objectius de la qualitat en els serveis socials
Article 117. Qualitat en recursos humans
Article 118. Coordinació amb altres instruments de qualitat dels serveis públics de la Generalitat
CAPÍTOL II. De la investigació, la innovació i la formació
Article 119. Investigació i innovació
Article 120. Objectius de la investigació i la innovació en serveis socials
Article 121. Formació
Article 122. Objectius de la formació en serveis socials
CAPÍTOL III. De l'avaluació
Article 123. Avaluació
Article 124. Objectius de l'avaluació
Capítol IV. De l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials (IVAFIQ)
Article 125. Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials (IVAFIQ)
Article 126. Col·laboració institucional

TÍTOL VIII. DE LA INSPECCIÓ, CONTROL I SEGUIMENT DELS SERVEIS SOCIALS
CAPÍTOL I. De la Inspecció en matèria de serveis socials
Article 127. Àmbit
Article 128. Funcions de la Inspecció de serveis socials
Article 129. Personal inspector
Article 130. Planificació de les actuacions inspectores
Article 131. Actuació de la Inspecció
Article 132. Mesures d'urgència
Article 133. Actes d'inspecció

Artículo 114. Exenciones y bonificaciones

TÍTULO VII. CALIDAD, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
CAPÍTULO I. De la calidad
Artículo 115. Calidad en servicios sociales
Artículo 116. Objetivos de la calidad en los servicios sociales
Artículo 117. Calidad en recursos humanos
Artículo 118. Coordinación con otros instrumentos de calidad de los servicios públicos de la Generalitat
CAPÍTULO II. De la investigación, la innovación y la formación
Artículo 119. Investigación e innovación
Artículo 120. Objetivos de la investigación y la innovación en servicios sociales
Artículo 121. Formación
Artículo 122. Objetivos de la formación en servicios sociales
CAPÍTULO III. De la evaluación
Artículo 123. Evaluación
Artículo 124. Objetivos de la evaluación
CAPÍTULO IV. Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials (IVAFIQ)
Artículo 125. Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials (IVAFIQ)
Artículo 126. Colaboración institucional

TÍTULO VIII. DE LA INSPECCIÓN, EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO I. De la Inspección en materia de servicios sociales
Artículo 127. Ámbito
Artículo 128. Funciones de la Inspección de servicios sociales
Artículo 129. Personal inspector
Artículo 130. Planificación de las actuaciones inspectoras
Artículo 131. Actuación de la Inspección
Artículo 132. Medidas de urgencia
Artículo 133. Actas de inspección

CAPÍTOL II. De les responsabilitats
Article 134. Subjectes responsables
Article 135. Responsabilitats
CAPÍTOL III. De les infraccions
Secció primera. De les infraccions
Article 136. Infraccions
Article 137. Tipus d'infraccions
Secció segona. De les infraccions de les entitats i serveis
Article 138. Infraccions lleus
Article 139. Infraccions greus
Article 140. Infraccions molt greus
Article 141. Prescripció d'infraccions
CAPÍTOL IV. De les sancions
Article 142. Sancions
Article 143. Sancions a entitats i serveis
Article 144. Imposició de les sancions
Article 145. Prescripció de sancions
Article 146. Publicitat de les sancions
CAPÍTOL V. Del procediment sancionador
Article 147. Procediment sancionador
Article 148. Mesures provisionals
Article 149. Destinació de l'import de les sancions

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Actualització de la quantia de les sancions
Segona. Modificació del Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials
Tercera. Ràtio de personal del servei d'inspecció en matèria de serveis socials
Quarta. Acreditació de qualitat
Cinquena. Persones amb diversitat funcional o discapacitat
Sisena. Del Sistema d'Informació Poblacional
Setena. Delegació de competències en les entitats locals en matèria de serveis socials de titularitat de la Generalitat
Vuitena. Convenis de mobilitat del personal funcionari

CAPÍTULO II. De las responsabilidades
Artículo 134. Sujetos responsables
Artículo 135. Responsabilidades
CAPÍTULO III. De las infracciones
Sección primera. De las infracciones
Artículo 136. Infracciones
Artículo 137. Tipo de infracciones
Sección segunda. De las infracciones de las entidades y servicios
Artículo 138. Infracciones leves
Artículo 139. Infracciones graves
Artículo 140. Infracciones muy graves
Artículo 141. Prescripción de infracciones
CAPÍTULO IV. De las sanciones
Artículo 142. Sanciones
Artículo 143. Sanciones a entidades y servicios
Artículo 144. Imposición de las sanciones
Artículo 145. Prescripción de sanciones
Artículo 146. Publicidad de las sanciones
CAPÍTULO V. Del procedimiento sancionador
Artículo 147. Procedimiento sancionador
Artículo 148. Medidas provisionales
Artículo 149. Destino del importe de las sanciones

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Actualización de la cuantía de las sanciones
Segunda. Modificación del Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales
Tercera. Ratio de personal del servicio de inspección en materia de servicios sociales
Cuarta. Acreditación de calidad
Quinta. Personas con diversidad funcional o discapacidad
Sexta. Del Sistema de Información Poblacional
Séptima. Delegación de competencias en las entidades locales en materia de servicios sociales de titularidad de la Generalitat
Octava. Convenios de movilidad del personal funcionario

Num. 8491 / 21.02.2019



10098

Novena. Vinculació dels consells locals d'inclusió i drets socials d'àmbit local o zonal amb els consells municipals d'inclusió i drets socials de la renda valenciana d'inclusió
Desena. Centres i serveis de caràcter experimental
Onzena. Serveis d'atenció primària de caràcter específic de competència de la Generalitat
Dotzena. Acreditació de programes
Tretzena. Acreditació de serveis i programes per a l'accés a subvencions
Catorzena. Víctimes de violència de gènere i masclista
Quinzena.
Setzena.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Transferència d'infraestructures i equipaments d'atenció primària i d'atenció secundària entre administracions públiques
Segona. Provisió de les prestacions a partir de l'entrada en vigor de la llei
Tercera. Registre general de titulars d'activitats, serveis i centres de serveis socials
Quarta. Finançament del personal
Cinquena. Finançament de les prestacions
Sisena. Estabilitat en l'ocupació
Setena. Procediments sancionadors en tramitació
Vuitena. Òrgans de participació
Novena. Exigibilitat de les prestacions garantides

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogació normativa

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Calendari de desenvolupament bàsic de la llei
Segona. Composició d'equips, ràtios en atenció primària i atenció secundària
Tercera. Targeta d'informació personalitzada
Quarta. Modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana
Cinquena. Entrada en vigor

Novena. Vinculación de los consejos locales de inclusión y derechos sociales de ámbito local o zonal con los consejos municipales de inclusión y derechos sociales de la renta valenciana de inclusión
Décima. Centros y servicios de carácter experimental
Undécima. Servicios de atención primaria de carácter específico de competencia de la Generalitat
Duodécima. Acreditación de programas
Decimotercera. Acreditación de servicios y programas para el acceso a subvenciones
Decimocuarta. Víctimas de violencia de género y machista
Decimoquinta.
Decimosexta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Transferencia de infraestructuras y equipamientos de atención primaria y de atención secundaria entre administraciones públicas
Segunda. Provisión de las prestaciones a partir de la entrada en vigor de la ley
Tercera. Registro general de titulares de actividades, servicios y centros de servicios sociales
Cuarta. Financiación del personal
Quinta. Financiación de las prestaciones
Sexta. Estabilidad en el empleo
Séptima. Procedimientos sancionadores en tramitación
Octava. Órganos de participación
Novena. Exigibilidad de las prestaciones garantizadas

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogación normativa

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Calendario de desarrollo básico de la ley
Segunda. Composición de equipos, ratios en atención primaria y atención secundaria
Tercera. Tarjeta de información personalizada
Cuarta. Modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana
Quinta. Entrada en vigor